

Neoliberalismo y crisis: El Mercurio de Valparaíso y la pérdida del tejido empresarial regional (1981-1983)

Neoliberalism and crisis: El Mercurio de Valparaíso and industrial decline in the region (1981-1983)

Neoliberalismo e crise: El Mercurio de Valparaíso e a perda do tecido empresarial regional (1981-1983)

JAIME J. LACUEVA MUÑOZ

Doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla (2008), ha sido investigador del Centro de Estudios Andaluces y profesor en la Universidad de Sevilla y en la Universidad Autónoma de Chile, y actualmente es profesor titular del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso y director del Magíster de Estudios Históricos: cultura y sociedad en Chile y América Latina.
Correo electrónico: jaime.lacueva@uv.cl
<https://orcid.org/0000-0003-3426-5034>

MARIO ANDRÉS GONZÁLEZ INOSTROZA

Magíster en Historia por la Universidad de Valparaíso. Actualmente es profesor del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso.
Correo electrónico: mario.gonzalez@uv.cl
<https://orcid.org/0000-0003-3854-5826>

GABRIEL MELLADO CAVIERES

Licenciado en Historia y Profesor de Historia y Ciencias Sociales por la Universidad de Valparaíso.
Correo electrónico: gabrielvalpo@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-5341-1426>



Resumen

La línea editorial del grupo El Mercurio estuvo definida desde mitad del siglo XX por una defensa del liberalismo económico como alternativa al modelo de desarrollo basado en la industrialización sustitutiva de importaciones. Cuando la dictadura de Pinochet aplicó su terapia de shock para reestructurar la economía chilena, los diarios del grupo elogiaron los resultados del llamado “milagro económico” como uno de sus principales logros. Sin embargo, las políticas neoliberales de los Chicago Boys tuvieron un efecto negativo en diferentes sectores productivos, especialmente en la región de Valparaíso, que contaba con una larga tradición industrial. El punto de inflexión llegó con la quiebra de la compañía Refinería de Azúcar de Viña del Mar (CRAV), una de las principales empresas del país, estrechamente vinculada con los grupos empresariales emergentes y con altos funcionarios del gobierno. La devaluación, la crisis financiera nacional y los efectos de la crisis de la deuda externa latinoamericana deterioraron progresivamente la situación económica del empresariado regional y de su amplia masa de lectores. Este trabajo aborda cómo *El Mercurio de Valparaíso* afrontó la contradicción entre su identificación con la dictadura y su modelo económico y los efectos del desmantelamiento del tejido empresarial de la región, adaptando la línea del grupo editorial a las circunstancias regionales para evitar que el cuestionamiento de la política económica debilitara los apoyos sociales del régimen. Para ello se analiza exhaustivamente el tratamiento editorial e informativo de la crisis en el diario, contrastado con el de otros medios oficialistas y de oposición.

Palabras claves: neoliberalismo, crisis, dictadura, prensa, Chile.

Abstract

From the mid-20th century, the editorial line followed by the media group El Mercurio was a defence of economic liberalism as an alternative to the development model based on imports substitution industrialization. When Pinochet’s dictatorship applied the ‘shock therapy’ to restructure the Chilean economy, the diaries of the group praised this policy, termed as an “economic miracle”, as one of the regime’s greatest successes. However, the neoliberal policies of the Chicago Boys had a negative impact on various industrial sectors, especially in the region of Valparaíso, which had a long industrial tradition. The inflection point was the bankruptcy of the sugar company CRAV, one of the country’s most important firms, which had close links with emerging economic groups and high government officials. Devaluation, the financial crisis and the effects of this crisis on Latin American external debt, progressively undermined the economic situation of the region’s entrepreneurs and the newspaper group’s wide readership. This work examines the way *El Mercurio de Valparaíso* managed the contradiction resulting from its adherence to the dictatorship and its economic model and the effects of the region’s industrial decline, adapting its editorial line to regional conditions to avoid support to the government’s economic policies undermining the regime’s social support base. The editorial and informative coverage of the crisis in this and others media, both for and against the government, is examined in detail.

Keywords: neoliberalism, crisis, dictatorship, media, Chile.

Resumo

A linha editorial do grupo El Mercurio foi definida desde o início do século XX pela defesa do liberalismo econômico como alternativa ao modelo de desenvolvimento baseado na industrialização por substituição de importações. Quando a ditadura de Pinochet aplicou a terapia de choque para reestruturar a economia chilena, os jornais coletivos elogiaram os resultados do chamado “milagre econômico” como uma de suas principais conquistas. No entanto, as políticas neoliberais dos Chicago Boys tiveram um impacto negativo em diferentes setores produtivos, especialmente na região de Valparaíso, que tinha uma longa tradição industrial. A virada veio com a falência da fá-

brica de azúcar CRAV, una das principais empresas do país, intimamente ligada a grupos empresariais emergentes e altos funcionários do governo. A desvalorização, a crise financeira nacional e os efeitos da crise da dívida externa latino-americana deterioraram progressivamente a situação econômica do empresariado regional e de seu amplo público leitor. O artigo aborda como *El Mercurio de Valparaíso* enfrentou a contradição entre sua identificação com a ditadura e seu modelo econômico e os efeitos do desmantelamiento do tecido empresarial da região, adaptando a linha do grupo editorial às circunstâncias regionais para evitar cuestionar o a política econômica enfraquecerá o apoio social do regime. Para isso, analisa-se exaustivamente o tratamento editorial e informativo da crise no jornal, em contraposição ao de outros meios de comunicação pró-governo e de oposição.

Palavras chave: neoliberalismo, crise, ditadura, imprensa, Chile.

Introducción

Como expresó el presidente Ricardo Lagos con motivo del centenario de su fundación, “es difícil entender la historia de Chile sin *El Mercurio*” (*El Mercurio*, 01/06/2000). En efecto, más allá de la permanencia de la cabecera en la capital por más de ciento veinte años –sumados al recorrido previo de *El Mercurio de Valparaíso*, fundado en 1827– y de su permanente vinculación a los poderes económicos, la influencia del grupo editorial y lo que Sunkel definió como su “privilegio de la función de dirección política” se ha sostenido sobre una relativa autonomía respecto de partidos y facciones, que le permitió “constituirse como árbitro de los conflictos en el seno de la derecha política y, por ende, en representante de las clases dominantes en su conjunto” y, en definitiva, presentarse como una “institución cultural seria y objetiva” (Sunkel, 1986, p. 104). Asimismo, mantener una línea editorial caracterizada por inhibirse de la contienda política directa y de la defensa de intereses particulares legitimó su proyección como “portavoz de la razón y del sentido común”, identificando sus valores y perspectivas “con los de la nación, con los de la civilización cristiana occidental, con el bien común” y asumiendo un papel de dirección ideológica de la clase dirigente en su conjunto al tiempo que ejercía una influencia innegable sobre los sectores medios y los poderes públicos. De hecho, como señala Correa (2005), “aunque *El Mercurio* fuera parte de los intereses empresariales de la familia Edwards [en cuya propiedad se mantiene desde 1877], su función no consistió en ser fuente de ganancia, sino formador de opinión pública” (pp. 53-54). Piedra angular de su pretendida identificación con la objetividad, la seriedad y la verdad ha sido un “estilo espartano y de aparente neutralidad” (Dooner, 1989, p. 99), cuyo canon fue establecido en las páginas editoriales y, en especial, en la columna “La semana política”, reflejo de la opinión del diario y redactada generalmente por sus directores (González Pino,

1992, pp. 365-367). Ese “estilo mercurial” fue definido precisamente por Arturo Fontaine Aldunate, quien ejercería ese puesto entre 1978 y 1982, como falta de énfasis, de “tono sereno, impersonal y algo distante [...] un estilo más bien coloquial y sencillo [...] que morigerara la lucha política” (*El Mercurio*, 13/02/1977).

La otra tendencia que marca la línea del grupo editorial El Mercurio es la identificación con el capitalismo y la defensa del liberalismo económico como alternativa al modelo de desarrollo basado en la industrialización sustitutiva de importaciones que había caracterizado la estructura económica del Estado benefactor desde la década de 1930. Correa encuentra editoriales en defensa de la economía liberal ya desde 1947, pero sobre todo desde la campaña para la promoción de la Misión Klein-Saks, que operaría en Chile entre 1955 y 1958 durante el segundo gobierno de Ibáñez del Campo y cuyas propuestas prefiguran el modelo económico aplicado más tarde por la dictadura. La reforma agraria y el movimiento universitario durante el gobierno de Frei Montalva acentuaron las posiciones de *El Mercurio*, que en 1967 comienza a publicar la “Página económica”, a cargo de un grupo de economistas de orientación neoliberal. Así que, en la presidencia de Allende, el carácter de prensa seria que le atribuyera Dooner no fue óbice para que *El Mercurio* desarrollara una labor sistemática de oposición al gobierno de la Unidad Popular mientras su propietario, Agustín Edwards Eastman, se radicaba en Estados Unidos (Correa, 1985; Soto, 1995, pp. 30-43; Correa, 2005, pp. 172-173; Lüders, 2012, p. 2; Herrero, 2014). En esa línea, los editoriales económicos que se insertaban en todos los diarios del grupo –entre ellos *El Mercurio de Valparaíso*– se convirtieron en un foro para la difusión de la doctrina monetarista. Si bien en un principio tales fórmulas podían parecer demasiado radicales y contaban con muy pocos adeptos –como el propio Edwards o Jorge Ross–, el mensaje fue extendiéndose gracias a la tribuna de *El Mercurio* y de otros medios, como las revistas *Panorama Económico Social* y *Qué Pasa*, fundada en 1971 y donde también coincidían como redactores Sergio de Castro, Álvaro Bardón y Pablo Baraona junto a otros colaboradores de *El Mercurio*, como Cristián Zegers o Hermógenes Pérez de Arce, y a otros intelectuales de la derecha nacionalista y gremialista, como Gonzalo Vial o Jaime Guzmán. A través de esas redes y de esos canales, la propuesta del modelo económico neoliberal de los *Chicago Boys* iría permeando en el conservador empresariado chileno, acostumbrado a operar bajo la protección que les brindaba el Estado, al tiempo que los jóvenes economistas asumían el desprecio de los gremialistas por la democracia de acuerdo con un concepto de la ciencia económica pretendidamente apolítico inspirado en Hayek (Soto, 1995, pp. 49-53; Dermota, 2002, pp. 42-43; González Inostroza, 2017, pp. 27-57). Y, así también, tomaría forma concreta en el documento llamado

El Ladrillo, el programa de reestructuración económica nacional que por mediación del almirante Merino llegó a los escritorios de los altos mandos militares a pocos días del golpe del 11 de septiembre de 1973 (Fontaine, 1988, p. 20). Como es sabido, Edwards y *El Mercurio* jugaron un decisivo papel en el derrocamiento de Allende, cuya gestación partió precisamente del estado mayor de la Armada en Valparaíso (González, 2000).¹

No obstante, aunque una parte de las fuerzas armadas ya estuviera convencida del programa neoliberal, la mayoría era partidaria de mantener el patrón de desarrollo vigente de acuerdo con la tradición castrense de intervención del Estado en la economía, lo que provocó fuertes tensiones entre ambas facciones durante los dos primeros años de la dictadura (Valdivia, 2003, pp. 151-201). En esa dura batalla entre dos proyectos económicos y políticos, *El Mercurio* renunció a su papel de árbitro y asumió el objetivo de ampliar las bases de adhesión social al nuevo modelo (Sunkel, 1986, pp. 103-104). Pero más allá incluso de la tesis de Soto que descarta la instrumentalización del medio en tanto que señala que fue el diario el que inspiró las ideas económicas de los empresarios y no al revés, para Cristi sería *El Mercurio* el que trazó la línea política del propio gobierno. Así, tras el golpe, el grupo editorial abandonó su tradicional conservadurismo y se radicalizó con la adopción del ideario político de inspiración carlista propio del gremialismo y del programa económico neoliberal de los *Chicago Boys*, exaltando un concepto de libertad que se identifica esencialmente con la libertad de precios y con la supresión de los aran-

1 Sobrepa los límites temáticos de este trabajo abordar la vinculación entre las políticas económicas neoliberales aplicadas en Chile y el contexto internacional y latinoamericano. No obstante, y aunque la bibliografía sobre el neoliberalismo es amplísima, es posible referir muy sumariamente algunas obras relativamente recientes. Para un análisis profundo de la configuración del neoliberalismo como sistema normativo de racionalidad global, Christian Laval y Pierre Dardot (2013), *La nueva razón del mundo: Ensayo sobre la sociedad neoliberal*. Parece imprescindible remitirse a la *Breve historia del neoliberalismo*, de David Harvey (2007), y también a la *Historia mínima del neoliberalismo*, de Fernando Escalante Gonzalbo (2015), donde se expone de manera sintética la coyuntura global que, en la década de 1970, marcó el final de la larga posguerra mundial, el cuestionamiento del consenso keynesiano, el agotamiento del pacto social que sostenía el Estado del Bienestar en los países centrales y la crisis del modelo desarrollista que en América Latina había cristalizado en la política de industrialización por sustitución de importaciones, el recrudescimiento de la Guerra Fría; así como la elaboración del programa neoliberal en el que confluyeron diferentes corrientes ideológicas que coincidían en su crítica al rol del Estado y, finalmente, los factores que condujeron a la imposición generalizada de las políticas de libre mercado a partir de los años ochenta (pp. 91-140). Un análisis de los argumentos teóricos que dieron sustento a los programas de reformas económicas, así como una valoración de su aplicación y sus efectos en diferentes países de la región –Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela– se encuentra en Ricardo Ffrench-Davis (2005), *Reformas para América Latina después del fundamentalismo neoliberal*. El mismo autor completa su análisis específico del caso chileno en *Reformas económicas en Chile, 1973-2017* (2018). Asimismo, la obra coordinada por Luis Rojas Villagra (2015), *Neoliberalismo en América Latina. Crisis, tendencias y alternativas*, en especial el capítulo de José Francisco Puello-Socarrás, “Neoliberalismo, antineoliberalismo, nuevo neoliberalismo. Episodios y trayectorias económico-políticas suramericanas, 1973-2015” (pp. 19-42). Finalmente, una completa revisión del problema histórico de la crisis de la deuda externa latinoamericana en Ocampo (2014). En todos estos trabajos es posible encontrar abundante bibliografía específica.

celes aduaneros, el principal apoyo estatal a la industria nacional. A través de sus editoriales *El Mercurio* “elaboró y expuso los fundamentos ideológicos de la dictadura de Pinochet”, no sobre la idea de restaurar una institucionalidad quebrantada por el giro al socialismo de Allende, sino sobre la de su refundación (Cristi, 2018, pp. 6-11). Sergio de Castro, principal asesor del Ministerio de Economía tras el golpe, sería una pieza clave en la transmisión del mensaje editorial de *El Mercurio* a la Junta Militar y en su conversión en medidas políticas concretas, como el nombramiento del presidente del grupo El Mercurio, Fernando Léniz, como ministro de Economía ya el 12 octubre de 1973 (Fontaine, 1988, pp. 53-56).

Asimismo, la influencia del grupo El Mercurio se vería enormemente reforzada por el cierre, confiscación y represión que sufrió la prensa de izquierdas a consecuencia inmediata del golpe militar. Hasta septiembre de 1973 se editaban en la capital nueve diarios de circulación nacional, de cuyo tiraje acumulado un 30 % correspondía a las cabeceras del grupo El Mercurio. Después del golpe y por la década siguiente se redujeron a cinco, manteniéndose los tres del grupo: *El Mercurio de Santiago*, *La Segunda* y *Las Últimas Noticias*. La recomposición del mercado editorial afectó igualmente a los medios regionales, que antes del golpe eran en su mayoría propiedad de empresarios locales, y solo siete pertenecían al grupo El Mercurio. Pero la supresión por decreto de la prensa opositora trajo el cierre de algunos, como el diario *La Unión* de Valparaíso, y otros se vieron después afectados por la política económica de la dictadura. Mientras, El Mercurio Sociedad Anónima Periodística (EMSAP) acaparaba ya en 1978 el 77 % del ingreso publicitario de toda la prensa nacional y el número de sus cabeceras regionales aumentaba a 15 en 1983 y a 19 en 1988, lo que significaba el 55 % de los diarios y el 60 % de la circulación nacional. En definitiva, la reestructuración favoreció la formación de un duopolio de la información compartido por el grupo El Mercurio y, a cierta distancia, la empresa Consorcio Periodístico de Chile (COPESA), propietaria del diario *La Tercera*. Así que, aunque muchos lectores se resistieran a comprar el que -a falta de un diario propiamente estatal hasta la reapertura de *La Nación* en 1981- aparecía como el periódico portavoz del gobierno, *El Mercurio* y sus cabeceras regionales pudieron ampliar enormemente su público objetivo y ejercer una influencia sin apenas contrapeso sobre un ancho segmento de la sociedad. Como admitiría Fontaine, para *El Mercurio* “la suspensión de actividades de los competidores no fue una mala noticia” (Délano, Luengo y Salazar, 1983, pp. 17; Santacruz, 1988, pp. 141-145; Garay y Willicke, 2007, p. 327; Dougnac, 2007, pp. 25, 54; Lagos, Salinas y Stange, 2009, p. 177). De esta forma, el mensaje de *El Mercurio* alcanzaría no solo a quienes se identificaban como partidarios del golpe o afines al ideario de la dic-

tadura y a quienes –por su secular ascendiente sobre la política nacional– habían prestado atención a las orientaciones que se marcaban desde sus editoriales, sino también a aquellos nuevos lectores que sencillamente no encontraban otra opción de prensa escrita que la edición capitalina o cualquiera de las caberas regionales que, junto a la información regional y a su propia sección editorial compuesta en las redacciones locales, incluían también los editoriales de “La semana política” y la “Página económica”.

Este trabajo aborda cómo *El Mercurio de Valparaíso* debió conjugar y resolver la contradicción que planteaba la identificación del grupo editorial con el modelo neoliberal y su defensa de las medidas aplicadas por el equipo económico del gobierno integrado por los *Chicago Boys* con el efecto desmantelamiento del tejido empresarial que sus políticas provocaron en una región que se había caracterizado por su larga tradición industrial. En ese sentido, los empresarios de la región, que habían declarado abiertamente su oposición al gobierno de la Unidad Popular (Ansaldó, 2004, pp. 83-86), manifestaron una cohesionada adhesión al golpe, como demuestran los insertos de la CRAV, una de las industrias tradicionales más importantes de la región (*El Mercurio de Valparaíso*, en adelante *EMV*, 22/9/1973), o las declaraciones de apoyo a la Junta Militar de la Asociación de Industriales de Valparaíso y Aconcagua, ASIVA (*EMV*, 10/11/1973). Los editoriales de la redacción local reflejaban asimismo el entusiasmo con que el empresariado regional acogió el giro político, así como las expectativas depositadas en los “programas de autonomía regional y de implantación de nuevas actividades industriales” (*EMV*, 25/11/1973). Sin embargo, el nombramiento de Jorge Cauas en 1974 como ministro de Hacienda trajo la aplicación del Programa de Recuperación Económica, la *terapia de shock* a través de la reforma arancelaria y del reajuste fiscal y monetario que terminaría afectando profundamente a la industria nacional (Meller, 2016, pp. 162-173), especialmente en la región de Valparaíso por su estructura empresarial diversificada (Vallina et al., 2020, pp. 31-32). Durante ese periodo, los editoriales se orientaron a despejar el pesimismo sobre el futuro de la industrialización chilena, a avalar un programa de desarrollo basado “no ya en la erección de barreras arancelarias prohibitivas, sino en la eficiencia real de las empresas nacionales” y a promocionar el beneficio que ello generaba al consumidor chileno, “que puede contar con artículos de mejor calidad a menor precio” (*EMV*, 7/9/1976). De manera específica, para Valparaíso se insistía en la expectativa de desarrollo económico de una región cuyos habitantes, “ahora con perspectivas esperanzadoras a la vista, pueden encarar el porvenir, sabiendo que es tarea suya y que el éxito premiará los sacrificios, ahora remunerativos, que realicen” (*EMV*, 11/9/1976). La sucesión

de Sergio de Castro como ministro de Hacienda se saludaba reconociendo que las políticas económicas habían “despertado resistencias”, pero auguraban éxitos duraderos y significativos (EMV, 26/12/1976). Y en el quinto aniversario del golpe se hacía un balance positivo del aumento de las exportaciones no tradicionales, de la importación de bienes de capital y materias primas y de la inversión directa extranjera y, en definitiva, se proclamaba una recuperación económica que se sostenía sobre “la solidez de nuestra moneda y la libertad de mercado” (EMV, 12/9/1973). Finalmente, se resaltaba “el rol protagónico del consumidor”, en tanto que su libertad de elección se había incorporado a “los factores creadores de la economía” (EMV, 9/5/1980). Con ello, el mensaje se orientaba no tanto a los propietarios de las grandes industrias regionales, como a los pequeños y medianos empresarios, así como a los sectores de profesionales libres, empleados de cuadros intermedios y trabajadores, ya caracterizados todos como consumidores.

Así, mientras los indicadores macroeconómicos mostraron un escenario positivo y la industria resistió la bajada de los aranceles a la importación, *El Mercurio de Valparaíso* pudo mantener un discurso que loaba sin matices el modelo que representaban las políticas neoliberales. Pero llegó un momento en que el pequeño y mediano empresariado regional comenzó a resentir los efectos de las nuevas reglas del juego y, especialmente, de la desprotección arancelaria. El punto de inflexión para la región llegaría con la quiebra de la CRAV a mediados de 1981, que inició una ola de cesantía que iría creciendo en los meses siguientes. El diario tuvo entonces que adaptar la línea editorial marcada desde Santiago a las circunstancias regionales y a la deteriorada situación económica de unos lectores sociológicamente diversos, para evitar que el cuestionamiento de la dirección política socavara los apoyos de la dictadura.

El papel político jugado por *El Mercurio* ha sido analizado por los autores antes citados y trabajos como los de Campero (1984; 2003), Silva (1993; 1996), Almonacid (2016) y Lovera (2018) han abordado el comportamiento de ciertos sectores productivos y gremios empresariales frente a los efectos de la aplicación del modelo neoliberal y de la crisis de 1982, relevando manifestaciones de rechazo al programa económico de los *Chicago Boys* que, no obstante, no implicaron resistencia en términos políticos al régimen o a la figura de Pinochet. También se analizaron los efectos regionales de la aplicación de las políticas neoliberales (Riveros, 1992). Sin embargo, no hay estudios sobre la reacción de la prensa afecta a la dictadura ante los efectos negativos de su política económica y de la crisis financiera que devino en parte de ella, en especial de la prensa regional. Desde un enfoque que

considera la prensa como un actor político cuya actuación se orienta a influir no solo sobre el gobierno y los grupos de interés, sino sobre los componentes de su audiencia (Borrat, 1989, p. 67) y como “un agente de cambio con sus propios intereses y valores, con una carga cultural desde la cual construye el acontecimiento en relación con sus vínculos con el resto de los actores sociales”, tomando parte en la disputa política mediante distintas estrategias (Rivera, 2017, p. 212), este trabajo plantea cómo *El Mercurio de Valparaíso* trató de contener en la región manifestaciones de oposición a la política económica del gobierno, semejantes a las que desarrollaron los empresarios agrícolas del Sur, que pudieran derivar en un debilitamiento del régimen de la dictadura, especialmente en el periodo más grave de la crisis económica. Para ello se analizará el tratamiento informativo y editorial del diario, tanto en los contenidos de “La semana política” y de la “Página económica” compartidos con el resto de cabeceras del grupo como en los propios de la edición regional. Se contrastarán asimismo con los de otras publicaciones de oposición, como la revista *Análisis*, que desde mediados de 1981 privilegió la información económica que era silenciada en los medios afines al régimen, y también de aquellos leales a la dictadura, como el diario *La Tercera*, tribuna preferida de los denominados “duros”, quienes criticaban la política económica neoliberal desde posiciones identificadas con el nacionalismo corporativista.

Del triunfalismo al estallido de la crisis: el caso CRAV

El año político de 1981 se iniciaba con un ambiente triunfalista, marcado por la ausencia de una oposición articulada y la entrada en vigor de la nueva constitución. El día anterior a la misma, el editorial comentaba las declaraciones de Bardón, ministro director de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN), que explicaba que, en el nuevo marco legislativo, los lineamientos de la política social debían definirse “por medio de las fuerzas del mercado, pues ellas son más eficaces para detectar las necesidades reales de la población” (EMV, 10/3/1981).

En las semanas siguientes, la sección de “Temas económicos” argumentaba que los “resultados positivos en los campos de la producción, los precios, las finanzas públicas, la inversión, el ahorro, el empleo, las remuneraciones y la distribución del ingreso” suponían las pruebas objetivas que desautorizaban las críticas al modelo económico del gobierno. La reestructuración del mercado financiero, la liberalización de los precios y la reforma arancelaria eran el fundamento para el desarrollo de un régimen de libertades individuales y de progreso identificado con la extensión del consumo entre la población con ingresos medios y bajos. Y a

quienes, desde la derecha leal a la dictadura, criticaban con argumentos éticos el peligro que el consumismo suponía para los valores espirituales del pueblo chileno, respondía que “salir de la pobreza significa, precisamente, mejorar los niveles de consumo”. La oposición y las resistencias a la política económica del gobierno se debía a la lenta adaptación de la sociedad, lo que se asumía con indulgencia –no falta de cierta soberbia–, “ya que los chilenos han sido formados en una tradición diferente, de raigambre estatizante, que los lleva a desconfiar de la iniciativa privada, la libertad económica, la descentralización y, en fin, de todo lo que podría denominarse estrategia no socialista de desarrollo” (EMV, 21/3/1981, p. 5). Por su parte, los editoriales de “La semana política” invalidaban esas críticas apelando a los indicadores macroeconómicos –“hasta los más escépticos se encuentran sorprendidos”– y legitimaba los resultados del gobierno como unánimemente aplaudidos por la opinión pública, “que los compara con la época traumática que se vivió durante el gobierno marxista” (EMV, 5/4/1981). Todo, en el mismo mes en que Friedrich Hayek visitaba Chile por segunda vez. Era el momento dorado del llamado *milagro económico* (Caldwell y Montes, 2015, pp. 115-120).

Sin embargo, en 1981 comenzaron a aparecer síntomas de lo que se vislumbraba como una gran crisis económica (Ffrench-Davis, Muñoz y Palma, 2002, pp. 345-346), así como las primeras disensiones del empresariado con las políticas neoliberales, especialmente en los sectores tradicionales perjudicados por la apertura aduanera (Campero, 1984, p. 231). Ya en diciembre de 1980 Carlos Podlech, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Trigo (ANPT), que agrupaba a los agricultores del Sur, había enviado una carta al ministro de Agricultura culpándolo de la quiebra de los agricultores (Almonacid, 2016, p. 123). En Valparaíso también era visible el mismo descontento por la brusca bajada de aranceles, como señalaba el presidente de la ASIVA. El balance era ya preocupante: más de cincuenta fábricas quebradas desde 1975, un importante aumento del desempleo y la práctica desaparición de rubros completos del tejido industrial de la región, como la pesquería industrial, la manufactura conservera y la confección textil, forzada a transformarse en importadora ante la invasión de productos extranjeros (EMV, 18/4/1981).

Sin embargo, el escándalo estalló en mayo cuando se anunció en primera página el cese de actividades de la azucarera CRAV. Inicialmente *El Mercurio de Valparaíso* presentó el caso como resultado de una fallida operación de compra de materia prima en el exterior (EMV, 3/5/1981), tratando de desvincular la quiebra de la empresa de la política económica del gobierno, que había traído un “creciente bien-

estar para toda la población” (EMV, 5/5/1981). Consecuentemente, responsabilizaba en exclusiva a la gerencia de la empresa por no haber previsto la pérdida de rentabilidad que implicaba la bajada internacional de los precios del azúcar, sin advertir que las “consecuencias no las soportaría ella sola sino también sus trabajadores, sus accionistas y la economía general del país”, y planteaba la posibilidad de reflotar la empresa (EMV, 9/5/1981). En cualquier caso, las noticias se sucedieron reflejando la preocupación por cómo afectaría a su más de ochocientos trabajadores, a todos sus acreedores y a las pequeñas y medianas empresas subsidiarias cuyas actividades giraban en torno a la factoría de Viña del Mar (EMV, 6/5/1981).

En efecto, fundada en 1887, la CRAV no solo era uno de los emblemas de la tradición industrial de la región de Valparaíso, sino también una de las diez principales empresas de Chile (Bravo, 2002). Formaba parte un “holding” que reunía a importantes compañías comerciales, eléctricas, industriales y financieras –la matriz CRAV Alimentos S. A. (CRAVAL), la cadena de supermercados Unicrav, Comercializadora y Distribuidora Nacional (CODINA), Industrias Varias S. A. (INVARSA), la Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S. A. (CONAFE), el Fondo Mutuo La Alborada, las aseguradoras Los Andes y La Alborada, entre otras–, sin contar las empresas que operaban como pantalla entre Chile y Panamá. El presidente del grupo, Jorge Ross Ossa, estaba emparentado con las principales familias de la oligarquía chilena, entre ellas los Edwards –con quienes su familia formó hasta los años sesenta un mismo conglomerado, el grupo Ross-Edwards–, y había participado también en el directorio de compañías del grupo Matte, el otro grupo empresarial tradicional, uno de cuyos directivos era presidente de CRAVAL al momento de la quiebra. Pero el dinamismo de Ross, entusiasta del modelo neoliberal, le había permitido levantar su propio grupo y vincularse también estrechamente a los llamados “Pirañas” –los grupos Cruzat-Larraín y Vial–, que se habían forjado al calor de la especulación bursátil, comprando participaciones de pequeños accionistas para depredar empresas mayores y, finalmente, sobrepasar a los grandes conglomerados tradicionales, el grupo Matte y el Edwards. Así, Javier Vial había permanecido en el directorio de la CRAV hasta 1980 y conservaba una parte importante a través del Banco Hipotecario de Chile (BHC). Por su parte, Manuel Cruzat había controlado el 20 % de acciones de la CRAV hasta 1976 y seguía participando en el grupo a través de empresas interpuestas. En realidad, resultaba difícil precisar la proporción que alcanzaba la participación de Cruzat en CRAVAL o si Ross era, más bien, un gestor de sus intereses, como pareció al ser nombrado presidente de la Compañía de Petróleos de Chile justo cuando estalló el escándalo de la CRAV. En cualquier caso, Ross aparecía como una suerte de agente articulador del sistema

de grupos que acaparaban el poder económico tras la concentración empresarial de los años anteriores. Y, por si fuera poco, su relación con Cruzat también lo vinculaba directamente con Sergio de Castro, que había sido director de la CRAV desde 1968 hasta 1973. Tras el golpe, De Castro se convirtió en el principal asesor del ministro de Economía, Fernando Léniz –presidente de *El Mercurio* durante el gobierno de Allende– y en 1975 fue nombrado ministro de Economía, asumiendo la cartera de Hacienda desde 1977. No extraña, pues, que en 1973 la CRAV obtuviera del Banco del Estado un crédito subsidiado por decreto de Léniz. Tampoco que pudiera adquirir con facilidad las fábricas de su única competencia, la Industria Azucarera Nacional (IANSA), cuando el gobierno procedió al desmantelamiento de la Corporación de Fomento (CORFO). Ni que, finalmente, en diciembre de 1979 otro decreto de Sergio de Castro terminara condonando todas las deudas de la CRAV con el Estado, que sumaban más de 400 millones de dólares. Al contrario, permitía entender la verdadera dimensión económica y política que podía alcanzar la quiebra de la CRAV, en tanto que afectaba “al centro neurálgico del sistema”, como señalaba el “dossier” que le dedicó *Análisis* (36, 7/1982), que también denunciaba la cobertura superficial que la prensa oficialista daba al caso, presentándolo apenas como una operación especulativa fallida para obviar la falta de mecanismos de control sobre la situación financiera de los grupos económicos.

Mientras la banca aseguraba que no peligraba la estabilidad del sistema y que “el problema solo está centrado en esa empresa” (*EMV*, 20/5/1983), la reacción del diario ante la quiebra de la CRAV se concretó en una serie de editoriales en los que persistía en la defensa del modelo económico y planteaba un doble mensaje. Por un lado, advertía a los empresarios de la necesidad de adaptarse y ofrecer mayor calidad a precios más bajos que la oferta extranjera, lo que redundaba en el interés de la mayoría (*EMV*, 25/5/1981). Admitía que la industria había experimentado en el último año una disminución de su tasa anual de crecimiento respecto de las acumuladas desde 1976 por efecto del ajuste que debía afrontar la economía nacional, pero esa circunstancia era, “por definición, de carácter transitorio”. Recurriendo a estadísticas oficiales, presentaba los buenos resultados de algunos rubros industriales y concluía que, por encima de “la impresión de cierto deterioro [...] la rentabilidad, a pesar de todo, es interesante, lo que indica que las perspectivas futuras son positivas” (*EMV*, 26/05/1981). La quiebra de la CRAV era, por tanto, una excepción debida a los riesgos asumidos por la empresa. Pero se aclaraba que “no hay posible desarrollo de una economía de mercado sin los riesgos que trae aparejados un régimen de libertad”. Incluso, encerraba una importante lección, porque, a diferencia del régimen anterior, “no hay plazo que no

se cumpla ni deuda que no se pague” en lo que se definía como un “sistema para adultos”. En definitiva, la libertad de mercado requería un mayor grado de eficiencia y responsabilidad “que el que podía admitirse en el régimen para menores que imperaba bajo la crónica orientación inflacionaria y proteccionista” (EMV, 19 y 25/5/1981).

Por otro lado, resaltaba los beneficios del modelo económico para la mayoría de la sociedad, ya que -además del saneamiento de las finanzas públicas, la estabilización de la moneda y la modernización de las estructuras de la producción y del comercio- garantizaba que las consecuencias de lo que se definía como “el fatal accidente económico de CRAV” no recayeran de manera generalizada sobre el bolsillo de los consumidores. De hecho, en un año el precio del kilo de azúcar había bajado de 62 a 38 pesos, beneficiando especialmente a los consumidores pobres, que en el régimen anterior habrían tenido que solventar las pérdidas de la CRAV con el incremento del “precio de cada cucharada de azúcar”. Ello demostraba que, para el gobierno, “el interés de la gran masa consumidora prevalece claramente sobre el de cualquier grupo de poderosas empresas”. De esta forma, el chileno medio podía confiar en que el mercado restablecería los equilibrios perdidos y en que “el sistema está al servicio de las mayorías”. En consecuencia, el gobierno debía “mantener a toda costa los principios de su política económica”, ya que cualquier “vacilación intervencionista o demagógica” sólo podría generar “graves perjuicios económicos y, tal vez, políticos” (EMV, 19 y 25/5/1981).

Esas últimas afirmaciones iban dirigidas a los “duros”, que venían denunciando que las políticas neoliberales favorecían la especulación (Valdivia, 2003, pp. 230-241). Uno de sus principales voceros, el empresario Ricardo Claro, era muy crítico con la gestión de los *Chicago Boys* y esos días tituló su columna de *La Tercera* con un “¡No al extremismo liberal!”. Citando a Juan Pablo II, acusaba tácitamente al ministro De Castro de arrastrar al país a los vicios del consumismo y de haber convertido la libertad y el mercado en los fines de una “especie de religión materialista [...] sustrayendo el proceso económico de toda norma moral”. Recordaba además que “las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile no perdieron o arriesgaron su vida combatiendo a los extremistas marxistas para reemplazarlos por extremistas liberales” (*La Tercera*, 26/5/1981).

El caso CRAV estaba levantando a la oposición interna. Ante eso, *El Mercurio de Valparaíso* no dudaría en utilizar el argumento de la lealtad a la figura misma de Pinochet para desenmascarar lo que definió como una “oposición larvada”, más peligrosa que la que ejercían los partidos ilegalizados y compuesta por “adulado-

res del régimen militar, que paradójicamente combaten las realizaciones más importantes y decisivas del Gobierno”, y advertía que las críticas sobre el gobierno recaían directamente sobre el jefe de Estado (EMV, 28/5/1981). El mismo día el director de *El Mercurio de Valparaíso* recordaba la visita de Hayek y su positiva valoración favorable de la política económica de la dictadura (EMV, 28/05/1981, p. 5). Y, por su parte, Bardón insistía en restar importancia a la quiebra, que definía como “una mezcla de un negocio mal hecho con una especulación que falló” (EMV, 26/5/1981).

Sin embargo, resultaba imposible seguir negando la gravedad del caso. Tras la autorización ministerial del cese de faenas y el despido masivo de trabajadores (EMV, 16/5/1981, 19/5/1981 y 23/5/1981), siguieron la constitución de una comisión liquidadora presidida por el exministro Léniz (EMV, 30/5/1981) y la querrela por fraude presentada por el Banco del Estado (EMV, 9/6/1891). El propio Javier Vial, como presidente de la Asociación de Bancos, admitía sus repercusiones sobre el sistema financiero (EMV, 28/5/1983). Y, así, *El Mercurio de Valparaíso* terminaba reconociendo en sus titulares que la crisis había pasado “de temblor a terremoto”, que “muchos sabían con tiempo lo que sucedería”, que traería “cambios profundos en mercados de valores” (EMV, 31/5/1981) y, finalmente, que “el problema de la CRAV ha tenido graves repercusiones” (EMV, 10/6/1981).

Aquellos mismos días *El Mercurio de Valparaíso* publicó un editorial titulado “Lo que Santiago nos quita” en el que se lamentaba de que la región metropolitana venía absorbiendo desde 1978 “un porcentaje cada vez mayor de los recursos regionales” y de que no se habían cumplido las transferencias presupuestarias destinadas a infraestructuras y servicios comprometidas por el gobierno para el quinquenio 1976-1981, lo que desincentivaba la creación de empleo y significaba “una vuelta al antiguo centralismo” (EMV, 7/6/1981). Ciertamente, el proyecto de descentralización económica estaba lejos de alcanzarse. Pero aquella denuncia, en realidad, no hacía sino desviar la atención de las verdaderas causas del desempleo y del deterioro industrial de la región.

A diferencia del tratamiento dado por *El Mercurio*, *La Tercera* sí había venido informando acuciosamente sobre el caso CRAV y advirtiendo sobre sus consecuencias, y Ricardo Claro insistía exigiendo responsabilidades:

Si claramente se trató de una maniobra especulativa, habrá que establecer quiénes fueron los especuladores. Si el origen de todo estuvo en un engaño ma-

sivo a productores, trabajadores, accionistas y al país todo, con mayor razón habrá de identificarse y sancionarse a los autores. (*La Tercera*, 9/6/1981).

Con las acciones de la CRAV ya sin valor alguno, en junio se celebró la última junta de accionistas, en la que miles de ahorradores minoritarios comprobaron cómo se habían esfumado todos sus capitales. Lo mismo ocurría con los depósitos en los fondos de inversión de las empresas del grupo, que afectaba a miles de pequeños ahorradores. Y es que la caída de la CRAV había provocado un efecto dominó sobre el resto de las empresas del grupo y el colapso amenazaba con extenderse a los bancos comprometidos con sus créditos y avales (*Análisis*, 36, 7/1981).

En un ambiente que iba del desconcierto al pánico, para algunos representantes de los gremios empresariales, como Rafael Cumsille, presidente nacional de los comerciantes minoristas, el país afrontaba la peor crisis económica de los últimos años y reconocía “una especie de desesperación colectiva”. Cumsille era un inequívoco partidario de la dictadura, como también Gastón Acuña, redactor de *La Tercera*, que en julio denunciaba las excusas y el anterior triunfalismo imprudente del equipo económico del gobierno. Declaraciones como aquellas eran recogidas por la escasa prensa que podía calificarse de opositora, como *Análisis*, cuyo número de agosto seguía analizando el caso CRAV y destacaba que las estadísticas oficiales ya revelaban una situación preocupante antes de la quiebra, con un desequilibrio preocupante de la balanza comercial y un peligroso aumento de la deuda vencida (*Análisis*, 37, 8/1981).

Efectivamente, para junio la situación se había vuelto caótica. A tal punto que ese mes el ministro De Castro viajaría sin publicidad a Estados Unidos -acompañado de Javier Vial y Carlos Urenda, abogado de la CRAV y del grupo Edwards- con la misión de informar a los bancos acreedores de que el derrumbe de la CRAV se había debido únicamente a un mal cálculo especulativo y que no afectaría a la política económica ni a la estabilidad del sistema financiero chileno. Los argumentos resultarían convincentes, dado que, en el segundo semestre de 1981, se recibieron otros 6000 millones de dólares (Cavallo, Salazar y Sepúlveda, 1988, p. 274).

Pero, a pesar de aquellas apuradas gestiones, de la confianza del gobierno en el llamado “ajuste automático” y del traspaso de los fondos previsionales desde el Estado a las nuevas sociedades administradoras de fondos de pensiones resultado de la reforma previsional que entró en vigor coincidiendo con la quiebra de la CRAV, el colapso de esta compañía agudizó las críticas incluso desde sectores partidarios del gobierno. Se hablaba de “castillo de naipes que se derrumba, de

economía de papel”. Como recogía *Análisis* (37, 8/1981), se había producido un masivo efecto psicológico entre los empresarios de “pérdida de fe, de confianza en el sistema económico”.

Mientras tanto, los editoriales políticos de *El Mercurio* invocaban la “Fe en la economía chilena”, como titulaba para defender “la aplicación firme y continua de un régimen de economía social de mercado [...] ejemplo de mayor progreso, estabilidad institucional y avance económico social” (EMV, 21/6/1981), al tiempo que denunciaba una ofensiva contra el modelo económico en la que se sumaban “los enemigos políticos abiertos del régimen”, “los adversarios larvados del gobierno” y “los descontentos por causa de los resultados de sus negocios personales” (EVM, 12/7/1982). Junto a esa heterogénea oposición interna, el régimen debía enfrentar la recesión mundial, coyuntura que -como declarara Pinochet- “es casi imposible de controlar” y “ajena a nuestra voluntad” (EMV, 22/6/1981).

Frente a ese panorama, comentando la exposición del ministro De Castro sobre el estado de la Hacienda Pública, el diario sostenía la conveniencia de mantener la aplicación inalterada del modelo económico del gobierno, ya que era precisamente su estabilidad uno de sus rasgos excepcionales, en clara alusión a la dictadura que lo había hecho posible y lo sostenía (EMV, 26/07/1981). En esa misma línea, a dos meses de la primera noticia del cierre de la CRAV, se zanjaba editorialmente el escándalo sin variar la interpretación inicial, es decir, resumiendo sus causas a una especulación fallida y a la pérdida de rentabilidad de la refinación de azúcar. Asumía que la especulación y la quiebra “tienen sin duda, aspectos ingratos, pero éstos son limitados y muy inferiores al beneficio social que significan y al eventual costo de tratar de evitarlas”. En definitiva, la crisis de la CRAV debía redundar en un mayor control del sistema financiero (EMV, 30/07/1981). Sin embargo, en los meses siguientes no se apreciaría ninguna mejora. A pesar del entusiasmo con que se celebró el aniversario del golpe en el editorial de *El Mercurio*, insistiendo en los logros económicos del régimen a partir de la comparación de “lo que Chile era a comienzos de septiembre de 1973 y lo que es hoy” (EMV, 12/9/1981), aquel invierno los ánimos estaban bajos: “es como entrar en un túnel que no se sabe de qué largo es ni qué hay en la salida”, declaraba un anónimo empresario a la revista *Análisis* (40, 11/1981), mientras que el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) resumía en la misma edición que el trimestre de julio a septiembre había sido “malo para la producción y peor para las ventas; y octubre, noviembre y diciembre no se vislumbran mejores”. No erraba en su previsión.

La crisis financiera nacional

El editorial del 2 de noviembre de 1981 se tituló “Vigencia del modelo económico” y se hacía eco de las presiones recibidas por el gobierno para modificar su política económica para, una vez más, defenderla: “el modelo sirve”. Se aducían unos resultados que “han permitido remontar con éxito una de las crisis más graves que ha sufrido nuestra economía”. Añadía que la propiedad privada y la libre iniciativa de mercado se cimentaban sobre el respeto a los derechos del hombre enunciado ya en la declaración de principios del gobierno de 1974, y tenían una proyección directa sobre la apertura del país al comercio internacional y la limitación de las funciones del Estado en economía. Para solucionar los problemas de la recesión internacional no era necesario variar el rumbo de lo que era –en palabras de Pinochet– “un viaje sin retorno” (EMV, 2/11/1981).

Sin embargo, la crisis no se había superado, como afirmaba el diario, sino que no había hecho más que comenzar. Al día siguiente se produjo la primera intervención bancaria con la que el gobierno tomó bajo control cuatro sociedades financieras y cuatro bancos, cuyos activos sumaban cerca del 35 % del sector financiero nacional (Brock, 1989). Mientras, en la región de Valparaíso aún se asistía a las consecuencias directas de la quiebra de la CRAV. Semanas antes se había informado que peligraban las indemnizaciones de los más de cuatrocientos trabajadores despididos (EMV, 2/10/1981) y que “los viejos portones de CRAV se cierran hoy para siempre” (EMV, 30/10/1981), reflejando la amargura y el impacto que provocaba el cierre definitivo de la planta de Viña del Mar. A pesar de ello, en la idea del viaje sin retorno, un editorial de “La semana política” se encabezaba con la consigna “No retroceder” ante lo que volvía a definir como una “transitoria dificultad económica”. Se advertía del peligro de acercarse a las políticas propias de países como la Nicaragua sandinista o la Francia de Mitterrand, “lamentablemente similar a nuestra experiencia allendista”, y malgastar el supuesto prestigio internacional que acumulaba el régimen tras imponer con éxito una verdadera economía de mercado sobre los valores del orden y la disciplina (EMV, 15/11/1981).

Coincidiendo con ese agitado mes de noviembre se produciría la visita de Milton Friedman a Viña del Mar, donde se celebró la XI reunión regional de la Mont Pèlerin Society. Esperadas con ansiedad por la prensa, las declaraciones del máximo referente del neoliberalismo supondrían, sin embargo, un inesperado varapalo a los argumentos con que *El Mercurio* sostenía la validez de las políticas económicas del gobierno. Aun negándose a aventurar un pronóstico, Friedman declaró que la

reciente intervención bancaria no resultaba justificable, como tampoco el respaldo estatal en defensa de los accionistas, aunque sí en el caso de los pequeños ahorradores. Afirmó asimismo que la economía internacional no estaba en recesión, lanzando un cañonazo a la línea de flotación del Ministerio de Hacienda y de la propia jefatura del Estado: “lo que ocurre es que a las personas que gobiernan los países nunca les gusta tomar la responsabilidad de las cosas que están pasando y tienen la costumbre de atribuir sus problemas a lo que sucede en el exterior”. Por último, manifestó que una economía de libre mercado sólo podía mantenerse en el tiempo en la medida en que existiera paralelamente una sociedad política libre (EMV, 16, 17 y 18 /11/1981).

Desmintiendo al gobierno y al propio Pinochet, *El Mercurio de Valparaíso* titulaba “Coincidencia de economistas en que no hay una recesión” (EMV, 17/11/1981), lo que sin duda generaría desconcierto entre sus lectores. También es fácil imaginar el impacto que causarían las palabras del maestro sobre sus aplicados discípulos chilenos, de los que, en aquella ocasión, solo parecía desmarcarse tímidamente Rolf Ludders, por entonces vicepresidente ejecutivo del grupo Vial (EMV, 17/11/1981). Al año siguiente, Friedman reafirmaría su posición respecto a la incompatibilidad entre el libre mercado y un régimen autoritario, a lo que Bardón respondería: “Milton Friedman conoce muy poco de Chile” (*Análisis*, 50, 10/1982).

Las columnas de opinión de Bardón de noviembre y diciembre de 1981 se destacaron por refutar las críticas que procedían de los sectores “supuestamente oficialistas” que reclamaban mayor protección arancelaria como parte de “las variadas modalidades que asume al socialismo”, e insistía en que “la apertura permite un consumo mayor, que para los más pobres significa sencillamente superar el nivel de subsistencia”. Trataba así de despejar las acusaciones de favorecer los intereses de los grupos económicos vertidas sobre el gobierno por la prensa asociada a los “duros” y corporativistas, acusándolas de generar un clima de incertidumbre que empeoraba la situación (EMV, 12/11/1981, 3 y 17/12/1981). Al tiempo, desde los editoriales económicos se invocaba haber logrado “estabilidad y desarrollo por sobre los niveles históricos en un mundo en recesión”, así como haberse alcanzado “cierto consenso sobre lo esencial del modelo económico que conviene mantener a cualquier costo” (EMV, 5/12/1981).

Sin embargo, no existía tal consenso y los resultados eran cuestionados por un espectro social y político cada vez más amplio. Así, para Ricardo Claro, el camino sin retorno por el que no se debía retroceder era un “camino a una depresión”, y anticipaba “dentro de un plazo relativamente breve una gran cantidad de quie-

bras, que pondrán en peligro la estabilidad misma del sistema bancario”, responsabilizando a la recesión internacional, pero sobre todo al Banco Central y al Ministerio de Hacienda por la errada política monetaria y las elevadas tasas de interés (*La Tercera*, 29/12/1981). Y, efectivamente, el pronóstico que no aventuró Friedman y que Bardón negaba era realmente grave. Así lo constataba la quiebra de 431 empresas con que se cerraba el año y la consecuente oleada masiva de despidos, datos revelados en un informe publicado en la revista *Análisis*. Entre todas ellas, las empresas del grupo CRAV sumaban más de mil cien trabajadores cesantes (*Análisis*, 01/1982; Angell, 1993, p. 117).

En la región de Valparaíso la onda expansiva de la quiebra de la CRAV ofrecía un panorama devastador del que *El Mercurio de Valparaíso* difícilmente podía inhibirse. Una encuesta de la ASIVA daba a conocer una importante disminución de la rentabilidad respecto al año anterior y se auguraba que 1982 sería “de regular a malo” (*EMV*, 7/1/1982). Se titulaba con “Fin del milagro” y los empresarios reconocían que “hubo exceso de optimismo, exceso de inversión, exceso de riesgo y falta de información. No nos explicaron las reglas del juego” (*EMV*, 10/1/1982).

Desde la SOFOFA se calificaba la situación de la industria como mala e inquietante y se señalaba como causa la reducción del consumo, lo que contradecía los argumentos del diario (*EMV*, 20/1/1982). Representantes de la industria textil se lamentaban de que la producción recibiera altos subsidios en otros países de América Latina para desventaja de la industria nacional (*EMV*, 22/1/1982). Y la Cámara de Comercio de Valparaíso expresaba su preocupación (*EMV*, 12/1/1982), mientras se multiplicaban los locales cerrados (*EMV*, 12/2/1982) y el endeudamiento con los bancos (*EMV*, 14/03/1982). En abril el titular que describía el panorama de la industria regional era “Adecuarse o desaparecer” (18/4/1982).

Pero, aunque las voces críticas se elevaban a medida que aumentaban las pérdidas, el gobierno insistía en su negativa a intervenir en ayuda de los sectores más castigados. Ya en febrero Pinochet había dejado claro a los productores agropecuarios que los problemas del agro eran responsabilidad de los agricultores y que el Estado no asumiría un papel regulador en la economía. Incluso el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Germán Riesco, asumía esa misma postura, desentendiéndose de las reivindicaciones de parte de sus propios afiliados (Almonacid, 2016, p. 127).

La situación se había agravado desde marzo cuando Sergio de Castro concretó una subida de impuestos que pretendía paliar el déficit fiscal provocado por la

crisis. La medida recaía especialmente sobre los sectores medios y altos, pero sus efectos no podían sino expandirse sobre toda la economía (*Análisis*, 44, 4/1982). Hasta ese momento, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y las principales asociaciones empresariales afiliadas a ella, como la SOFOFA, la SNA y la Cámara de Chilena de la Construcción, se habían quejado puntualmente de las rebajas arancelarias y de las altas tasas de interés. Pero, siendo fervientes partidarias del régimen, habían mantenido su apoyo al ministro De Castro y a su política. Las únicas excepciones habían sido la Confederación de Productores Agrícolas (CPA), cuyo presidente había declarado que “la recesión en gran parte es autogenerada por medidas equivocadas” (*Análisis*, 37, 8/1981), y la ANPT, presidida por Podlech, que afirmaba sin ambages que “el 99 por ciento de los chilenos está contra el actual sistema económico”. En la popular revista *Cosas* declaraba:

Continuar como estamos es ir precisamente a un caos, porque la verdad es que ni con Frei, ni con Allende, ni con nadie habíamos estado peor [...] El país se ha convertido en un depósito de chatarra. Es el mayor puerto libre del mundo, porque un diez por ciento de aranceles no es un arancel [...] El único buen negocio que se puede hacer aquí es el de la prostitución y el de las drogas. (Citado en *Análisis*, 44, 4/1982)

Aquella subida de impuestos marcaría ciertamente un quiebre en el apoyo del empresariado y revelaría profundas disensiones entre sectores que habían sido entusiastas partidarios del golpe militar y que hasta entonces habían respaldado al régimen sin fisuras. Las declaraciones se sucedieron cuestionando la ortodoxia neoliberal y lo que se consideraba una traición a los principios de la Junta Militar, cuyo Bando 36 enunciaba que “el aumento de la producción y de la productividad son imperativos dramáticos de nuestra patria [...] respetar los derechos de los trabajadores [...] combatir el desempleo” (Correa, Figueroa, Jocelyn-Holt, Rolle y Vicuña, 2003, pp. 398-400).

Así, los presidentes de la Cámara de la Construcción y de la Cámara de Comercio criticaron abiertamente la subida de impuestos. Juan Jara y León Vilarín, presidentes de los gremios de taxistas y de camioneros, que protagonizaron los paros previos al golpe, reclamaban “rescatar al gobierno de manos de un grupo privilegiado” y la necesidad de un plebiscito sobre el modelo económico, respectivamente. Críticas similares vertieron el general Leigh, miembro de la primera Junta Militar, el general Díaz Estrada, ministro de Trabajo en 1974-1975, y Pablo Rodríguez, exlíder de Patria y Libertad. Aquellas declaraciones aparecían recogidas en la revista *Análisis*, algunas publicadas previamente en medios oficialistas como *La*

Tercera. Y, como se apuntaba, todas coincidían peligrosamente con las de quienes siempre habían estado en contra de la dictadura, porque, además de los obreros y asalariados, “también los profesionales y técnicos conocen como nunca antes lo que es la cesantía, mientras los empresarios se debaten entre deudas y bajas ventas” (*Análisis*, 44, 4/1982).

Efectivamente, las desafecciones entre los partidarios de la dictadura resultaban ya tan clamorosas que, aunque antes hubiesen sido definidas por *El Mercurio* como “oposición larvada”, también este terminó por cuestionar la conveniencia de mantener la aplicación irrestricta del modelo neoliberal. Arturo Fontaine, director de *El Mercurio* de Santiago, afirmó en una columna titulada “Malos días”, que criticaba los asesinatos políticos y el manejo económico, que “las cosas se están haciendo mal, se están manejando con una rudeza de inexperto”, lo que ponía al régimen “en peligro de quedar sin más defensores que sus aguerridos soldados” (*EMV*, 28/3/1982). Era un golpe mortal para De Castro y también una severa advertencia al propio Pinochet. Fontaine debió renunciar y Edwards asumió personalmente la dirección. Pero a las dos semanas también De Castro abandonó el Ministerio de Hacienda.

El cuestionamiento de la ortodoxia neoliberal

La salida de Sergio de Castro provocó un baile de sillas en el gabinete y los generales Luis Danús y Gastón Frez, sus principales adversarios en el interior del gobierno, se hicieron cargo, respectivamente, del Ministerio de Economía y de la ODEPLAN, que había sido el centro de operaciones de la ortodoxia neoliberal, desplazado entonces al Banco Central. Allí pasó como presidente Miguel Kast y encontró acomodo para De Castro, quien también se encargaría a partir de entonces de los editoriales económicos de *El Mercurio* (*Análisis*, 48, 4/1982). Así, el comentario de la reforma del gabinete elogiaba el patriotismo y la firmeza de Sergio de Castro en la concepción y ejecución del modelo de economía de mercado, pero llevaba por título “Nueva etapa” (*EMV*, 24/4/1982), lo que indicaba sutilmente un quiebre tanto en el rumbo de la política económica como en la defensa que el periódico había hecho de ella hasta ese momento.

De hecho, los cambios en el área económica parecían buscar un equilibrio de tendencias, conservando los *Chicago Boys* el Ministerio de Hacienda con Sergio de la Cuadra. Pero pronto aflorarían las fracturas que ya se habían manifestado, incluso entre ellos, a propósito de la conveniencia de rebajar los salarios –a pesar de su evidente costo social– o devaluar la moneda, a lo que se había negado siempre De

Castro, empeñado en mantener el valor del dólar a 39 pesos. Así como también las tensiones con los ministros militares, acusados de estatismo por los economistas neoliberales, sobre las medidas para hacer frente a la comprometida situación de los bancos (Cavallo et al., 1988, p. 277-278).

En los meses siguientes, la actualidad económica y política estarían marcadas por esos dos temas decisivos. Así, a fines de abril, a solo una semana del cambio de gabinete, se anunciaba una segunda intervención bancaria, tras la que *El Mercurio* advertía a los nuevos ministros de Economía y Hacienda de no “dar lugar a expectativas e interpretaciones erradas”, así como a los dirigentes empresariales de “no alentar falsas esperanzas” sobre los efectos positivos de un cambio en la política económica, que solo podía conducir a “agravar y retrasar un ajuste que a todas luces resulta inevitable” (*EMV*, 5/5/1981). Asimismo, se recogían declaraciones de Pinochet sobre mantener y reafirmar la política económica, si bien se refería también a la necesidad de tomar medidas para combatir el alto desempleo y reiteraba que no habría devaluación (*EMV*, 4 y 9/6/1981), lo que finalmente sí se produjo en junio.

Siendo imposible eludir lo que había dejado de ser “un rumor de opositores o un tema controvertible para transformarse en la evidencia de un fracaso” (Moulian, 1997, p. 282), *El Mercurio de Valparaíso* recogería en primera página nuevas declaraciones de Pinochet, esta vez presentándolas como “la alternativa más justa” y descartando “que la devaluación constituya el quiebre de la actual política económica” (*EMV*, 17/6/1982). A pesar de esos fútiles mensajes de tranquilidad, la devaluación del peso –que redujo su relación con el dólar un 18 % de manera inmediata– sembró un clima general de desconfianza y extendió la crisis a todos los sectores de la economía y de la sociedad que hasta entonces habían podido sortearla. Mientras las tasas de interés seguían creciendo hasta un 5 % mensual por la súbita falta de liquidez, el dólar alcanzaría en agosto los 70 pesos y el desempleo se acercaba al 20 %. La carga de las empresas se agravaba con la reciente reforma fiscal y la intervención bancaria de abril no había resuelto la grave situación del sistema financiero. Los créditos impagos (carteras vencidas) sumaban ya un 54 % del capital de todos los bancos, a lo que se añadía el problema de los préstamos concedidos a empresas de sus mismos propietarios (carteras relacionadas), que afectaba especialmente a los grupos empresariales más importantes, el grupo Cruzat-Larraín y el grupo Vial (*Análisis*, 48, 8/1982; Cavallo et al., 1988, pp. 292-295; Meller, 2016:193-202).

Pero mientras el grupo Cruzat-Larraín –ya afectado por la crisis de la CRAV– optó por plegarse discretamente a las indicaciones, Javier Vial –propietario del Banco Hipotecario de Chile (BHC), que también controlaba un 30 % del Banco de Chile y presidía la Asociación de Bancos– adoptó una estrategia financiera más agresiva y una postura abiertamente crítica con el gobierno, especialmente a partir de la devaluación, ganándose la animadversión y colocándose en el punto de mira del propio Pinochet (Cavallo et al., 1988, pp. 293-294). De hecho, aunque la devaluación marcó el fin del monetarismo más extremo, “dando paso a un liberalismo económico de carácter más pragmático” (Gárate, 2012, p. 284), el desplome de la economía chilena tendería a agudizar las diferencias entre las diversas facciones del oficialismo.

Los *Chicago Boys*, señalados ya por la prensa opositora como los “autores del anti-milagro”, descalificaban a los productores que exigían aranceles proteccionistas y culpaban a los grupos económicos de ser los responsables del desastre por no poder afrontar unos créditos que habían obtenido gracias a la desregulación del mercado financiero que ellos mismos habían impulsado (*Análisis*, 48, 8/1982). Pero también mostraban fisuras entre la debilitada posición de Sergio de la Cuadra como ministro de Hacienda y la postura de Kast desde el Banco Central o De Castro desde *El Mercurio*, para quienes la devaluación había agudizado la crisis y las indecisiones del gobierno solo socavaban la firmeza que la política económica debía mantener frente a las propuestas de Frez y Danús de abandonar la estrategia del “ajuste automático” y virar hacia la reactivación industrial (Arellano y Cortázar, 1982; Cavallo et al., 1988, pp. 295-296). Por su parte, los grupos exigían moratorias y esperaban que el Estado respondiera por las deudas que eran incapaces de asumir, amparados por la amenaza del efecto en cadena que generaría su caída. Mientras, el gran empresariado tradicional agrupado en la CPC, la SNA y la SOFOFA apostaba por el cambio en política económica y por recuperar a “la vieja guardia alessandrística” defensa de sus intereses (*Análisis*, 52, 12/1982), incluso si eso implicaba “posibilidades de relevo” en la jefatura del Estado, puesto que “el presidente Pinochet y sus principales colaboradores en este momento representarían un escollo”, como denunciaba *La Tercera* (28/11/1982). Finalmente, los “duros”, aunque carecían de base social definida, se disputaban el poder con los *Chicago Boys* apoyados en la Junta de Generales y, desde la tradición del pensamiento autoritario con ingredientes de inspiración fascista y absolutamente fieles a la figura de Pinochet, se resistían a cualquier forma de apertura política “al estilo español”, reclamaban una política exterior más independiente de Estados Unidos, eran partidarios de la intervención estatal en la economía y asumían posiciones antio-

ligárquicas que los enfrentaban tanto a los tecnócratas como a los grupos, acusando a unos y a otros de traicionar los principios del golpe militar (Zemelman, 1990, p. 312).

Sus pretensiones coincidían plenamente con los mensajes de Claro en *La Tercera*, que desde tiempo atrás venía criticando duramente la “fronda pseudoaristocrática” que representaban los grupos económicos de reciente aparición y los tecnócratas aperturistas (16 y 22 de abril de 1980).² Por si fuera poco, la situación política, enrarecida por las sospechas que levantó la muerte del expresidente Frei y por la investigación del asesinato del expresidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez, a manos de agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), se complicaba con las exigencias de los agricultores, que en julio reunieron en Santiago a representantes de 84 organizaciones de todo el país (Almonacid, 2016, p. 128). Por otro lado, la crisis animaba la agitación de los partidos de izquierda y de los sindicatos. En agosto, dirigentes de 600 organizaciones exigieron reunirse con Pinochet, tras lo que fueron detenidos los presidentes de la ANEF, de la Unión Democrática de Trabajadores (UDT) y de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) (*Análisis*, 48, 8/1982; Cavallo et al., 1988, p. 295). El día 19 se convocó la primera “Marcha del Hambre”, que desde las poblaciones de Santiago llegó hasta el céntrico Paseo Ahumada, donde fue duramente reprimida por Carabineros (Vicaría de la Solidaridad, 8/1982, p. 29; Osorio, 2019).

A la influencia de los “duros” y a las presiones de los grandes gremios empresariales, que coincidían en tender a una política económica nacionalista, respondieron los vaivenes de Pinochet a la hora de designar el liderazgo del equipo económico -debatándose entre el general Danús y de la Cuadra (*Análisis*, 48, 8/1982)- y su amenaza de desterrar a Vial en julio de 1982 (Cavallo et al., 1988, pp. 293-294). Pero también las argumentaciones de tono demagógico que reiteraría hasta final del año y que parecían tanto avenirse al ánimo antioligárquico de los “duros” como tratar de aplacar las manifestaciones populares:

Muchos políticos y financistas que se decían partidarios del gobierno han mostrado su verdadera cara [...] No es posible que mientras el gobierno y los chilenos se esfuerzan por sortear la situación económica [...] unos pocos aumenten su ambición política y financiera. (*Análisis*, 52, 12/1982)

2 El término remitía al libro de Alberto Edwards (1928) *La fronda aristocrática en Chile*, que interpretaba la historia de Chile en el siglo XIX como resultado de la pugna entre los intereses de la aristocracia y el poder autoritario y virtuoso del Estado.

Ante las fracturas del oficialismo y los movimientos políticos y sociales de oposición, *El Mercurio de Valparaíso* se alinearía con la figura de Pinochet, difundiendo declaraciones en las que insistía sobre los “problemas de origen externo, ajenos a nuestro control”, y llamaba a la unidad frente a los aprietos económicos, a “saber afrontarlos con sacrificio”, aunque “marxistas y políticos” trataran de obtener réditos políticos de la coyuntura (EMV, 22/6/1982).

Pero, asimismo, en el invierno de 1982 el diario comenzaría a mostrar su distanciamiento del gobierno y de unas políticas que consideraba no ortodoxas. Así, los efectos de la crisis a escala regional empezaron a ser presentados no solo como consecuencia de la recesión internacional, sino también como resultado de la falta de firmeza en la aplicación del necesario ajuste automático. Así, se sembraba la duda sobre la efectividad de la reciente devaluación, cuyo resultado habría de diluirse “entre seis semanas a dos meses más, produciéndose un fuerte incremento de la inflación” (EMV, 9/7/1982). Y, de paso, se responsabilizaba a los empresarios locales de haber recurrido “ellos mismos a la compra en el extranjero de productos manufacturados que, en definitiva, sustituían parte de su propia elaboración” (EMV, 10/7/1982). Cualquier cosa menos asumir la responsabilidad de quien escribía aquellos editoriales. Asimismo, se recogían las advertencias de Kast, presidente del Banco Central, en “charla a puertas cerradas” con los industriales de la región, sobre la necesidad de adaptarse a una baja en el nivel de vida (EMV, 18/7/1982), y las opiniones del presidente de la SOFOFA sobre la situación industrial “verdaderamente delicada” y su pronóstico de una larga duración de la crisis (EMV, 1/8/1982). Nada de ello podía contribuir a generar confianza en el gobierno, como tampoco los ecos recogidos entre el sector industrial y de la construcción -los más importantes de la región- sobre la incertidumbre que generaban “las nuevas medidas que fueron anunciadas por el gobierno en el sentido de reactivación del sector privado”, las que se calificaban de solución parcial (EMV, 31/7/1982).

Ciertamente, el panorama industrial era ruinoso, y a las noticias sobre los remates de las instalaciones y equipos de la CRAV se sumaban los de la planta de Unión Lechera Aconcagua (ULA) en Viña del Mar (EMV, 4/8/1982), otro de los pilares industriales de la región que también había quebrado en junio tras las frustradas gestiones de los bancos acreedores para evitar su cierre definitivo (EMV, 8 a 10/6/1982). Un tercer caso era el de la empresa alimentaria Costa, que ya en mayo había vendido un 70 % de sus acciones al grupo Carozzi (EMV, 18 y 19/5/1982), con sede en Santiago, y que finalmente terminaría abandonando la producción en su

fábrica de Valparaíso. Incluso el puerto de Valparaíso venía registrando una fuerte disminución de su actividad desde meses atrás, con una cesantía que afectaba a más del 50 % de tripulantes y trabajadores portuarios, como denunciaban los dirigentes sindicales (EMV, 28/4/1982 y 13/6/1982). El que había sido tradicionalmente primer puerto del país era ahora calificado como “un enfermo que requiere de atención urgente”, afectado por la recesión internacional y unas infraestructuras obsoletas (EMV, 13/6/1982), pero también –a juicio del presidente de la Cámara de Comercio de Valparaíso– por mantener su administración estatal, sugiriendo su privatización (EMV, 12/5/1982).

Por supuesto, la situación del comercio local no era mejor. La Cámara de Comercio de Viña del Mar estimaba que el 25 % de los establecimientos que permanecían abiertos cerrarían sus puertas antes de fin de año (EMV, 4/7/1982), asfixiados por la contracción de la demanda que comenzó con la crisis de la CRAV y que se agravó con el alza de los precios provocada por la devaluación, y exigía medidas de reactivación del empleo y créditos a intereses razonables (EMV, 20/8/1982). En Valparaíso, el presidente de la Cámara de Comercio Detallista se lamentaba de que “la gente compra sólo productos muy esenciales” (EMV, 24 y 29/8/1982).

Aunque parte de la atención mediática se desviara a la investigación del caso de los llamados “psicópatas de Viña del Mar”, cuyos crímenes habían conmocionado a la opinión pública de todo el país, la situación económica era desoladora. En el primer semestre de 1982 habían quebrado 362 empresas más (Análisis, 48, 8/1982) y las declaraciones del brigadier Julio Bravo, ministro secretario general del Gobierno, llamando a los chilenos a “cambiar su actual mentalidad pesimista y derrotista” para enfrentar la realidad del país con otra “optimista y diáfana”, no podían sonar más que ridículas (EMV, 31/7/1982). De hecho, los editoriales de *El Mercurio de Valparaíso* sobre la situación empresarial de la región se desmarcaban abiertamente de esos ilusorios llamados a recuperar el optimismo, reconociendo en cambio la “honda preocupación” que generaba conocer los análisis que presentaba la ASIVA y el efecto que el cierre de industrias y comercios de la región tendría sobre el empleo (EMV, 10/7/1982). En una crítica directa al gobierno, que parecía ignorar la gravedad de la situación en la región, se lamentaba:

Es doloroso tener que usar la expresión *defensa de Valparaíso*, porque da la idea de una región atacada, combatida [...] Pero en un plano de sincera lealtad y de sólida cooperación con el gobierno, cometeríamos una falta imperdonable hacia la autoridad si no señalamos el olvido en que se encuentra la Quinta Región

[...] a pesar del esfuerzo y la constancia con que sobre ellos insisten desde la Intendencia Regional. (EMV, 21/7/1982)

Ese reconocimiento explícito a la Intendencia, ocupada por el vicealmirante Luis de los Ríos, reflejaba las fracturas al interior del oficialismo y evidenciaba el distanciamiento del diario respecto del equipo económico del gobierno, cuestionado ya no solo por los “duros”, sino entonces también por la ortodoxia neoliberal que defendía De Castro desde la cabecera de *El Mercurio* en la capital. De hecho, el anuncio que hizo Pinochet de medidas encaminadas a “terminar con la cesantía, reactivar el país” (EMV, 19/8/1982) podía parecer una respuesta a las presiones de los corporativistas, del empresariado tradicional y de la masa creciente de desempleados. Sin embargo, más allá de lo que podían interpretarse como “veleidades pseudopopulistas” (Zemelman, 1990, p. 313), nunca se produjo una escora real de Pinochet hacia las posturas de los “duros” ni un giro de la política económica hacia la reactivación industrial. Muy al contrario, declaraciones en esa línea coincidían con el mensaje sobre el origen externo de la crisis (EMV, 18/8/1982).

Para fines de agosto, la cesantía alcanzaba el 23,4 %, según las estadísticas elaboradas por la SOFOFA y la Universidad de Chile, y en la región de Valparaíso superaba esa cifra conforme a la estimación de la ASIVA (EMV, 18/8/1982). El Programa de Empleo Mínimo (PEM) puesto en marcha en 1975 nunca había dado buenos resultados, pero ahora se encontraba completamente desbordado y desde la ODEPLAN se trabajaba en un nuevo plan de emergencia para contener la cesantía. Por otra parte, el gobierno había logrado la salida de Vial del Banco de Chile para intentar contener la bola de nieve que formaban las carteras vencidas y relacionadas, pero el saneamiento del sistema financiero seguía pendiente. Sin embargo, el gobierno no solo necesitaba resultados rápidos -algo realmente imposible-, sino superar el deterioro de imagen que provocaba la evidente falta de cohesión del gabinete que provocaba la tensión entre los ministros militares y los tecnócratas (Cavallo et al., 1988, pp. 294-295). La solución por la que optó Pinochet fue un nuevo cambio en el gabinete, en el que fundió los ministerios de Hacienda y Economía, poniendo a cargo a Lüders a fines de agosto de 1982.

Lüders nombró a Carlos Cáceres presidente del Banco Central y a Bardón subsecretario de Economía y, aunque asumía con amplios poderes, también afrontaba una situación catastrófica. El endeudamiento público y privado y la demanda de divisas se había agravado desde el 17 de agosto por el anuncio de suspensión de pagos del presidente mexicano López Portillo, que alarmó a la banca internacional, cortó el flujo de crédito hacia los países endeudados y desató la crisis de la

deuda externa en toda América Latina (Bárcena, 2014, p. 9). Pero más allá de eso, cuando uno de los problemas más graves era precisamente la situación de los grupos, su nombramiento causó estupefacción en el Consejo de Generales y entre los “duros” por su estrecha relación con el BHC de Vial, del que había sido hasta poco antes vicepresidente y uno de sus principales socios (*Análisis*, 52, 12/1982). Una semana después, al tiempo que los presidentes de la SOFOFA y la ASIVA manifestaban en Viña del Mar su preocupación por la crisis de la industria de la región (*EMV*, 7/9/1982), Ricardo Claro respondería al nombramiento del nuevo superministro con una columna titulada “La vía de Chicago hacia el socialismo”, en la que señalaba a “los extremistas liberales” como responsables de la quiebra generalizada de los sectores productivos y anunciaba que el sistema bancario estaba “muy cerca del colapso”. Denunciaba que “la recesión importada se convirtió en una depresión, por la soberbia y dogmatismo de los que no querían ver la realidad”, se preguntaba si “podría existir un caldo de cultivo mejor para el socialismo que un millón de cesantes” y exigía “necesario volver a los Principios de la Junta de Gobierno” (*La Tercera*, 7/9/1982).

El domingo 12 de septiembre, las cabeceras de *El Mercurio* publicaron a toda página una entrevista a Bardón, en la que expuso con argumentos técnicos que la situación económica se debía a factores externos, aunque ya había comenzado a mejorar, y pronosticaba recuperar los niveles previos a la crisis en un año y medio. Preguntado directamente por la idoneidad de Lüders para la dirigir la economía nacional siendo a la fecha codeudor de doce mil millones de pesos del grupo Vial-BHC, Bardón desmentía que ello supusiera problema alguno –“yo creo que no hay relaciones entre los que hacen la política y los que tienen el dinero [...] los grupos nunca han estado en el gobierno, ni ahora ni antes”– y elogiaba su flexibilidad para enfrentar a la crisis de credibilidad del gobierno, lo que lo convertía en “el más indicado” para el momento (*EMV*, 12/9/1982). Sin embargo, la luna de miel duraría poco. En la *Exposición sobre el estado de la Hacienda Pública* presentada en octubre, Lüders reconoció la gravedad de la crisis –con caídas de 13 % del PGB y del 18,2 % en la producción industrial– y afirmó que solo un tercio del grave endeudamiento de empresas y familias era atribuible a la recesión internacional, siendo el resto achacable a la pérdida de competitividad de las exportaciones, agravada por las altas tasas de interés y la desprotección de las industrias nacionales. Lüders estaba señalando directamente al “mecanismo de ajuste escogido” por Sergio de Castro de ser responsable de la mayor parte de la crisis (Lüders, 1982, pp. 7-14), lo que provocaría un distanciamiento total entre ambos (*Análisis*, 52, 12/1982).

Mientras tanto, en octubre había entrado en funcionamiento el Programa de Ocupación para Jefes de Hogar (POJH), que habría de beneficiar inicialmente a diez mil personas en la Quinta Región (EMV, 15/9/1982 y 8/10/1982). Sus efectos positivos ya eran publicitados apenas a una semana de su inicio como la “solución del drama humano que genera la falta de trabajo” (EMV, 6/10/1982) y, según aseguraba el propio Lüders, en menos de dos semanas ya había contribuido a reducir en dos puntos el índice de desempleo, mientras prometía que “el gobierno va a gastar lo que sea necesario para reducir drásticamente las tasas de desocupación del país”. Para entonces, alcanzaba el 23,5 % en la región, según los datos entregados por la Intendencia y la ASIVA, lo que no dejaba de ser dramático e indicaba el gran deterioro de la industria regional, según reconocía el propio diario (EMV, 13/10/1982).

En tanto que se sucedían las noticias sobre la desaparición de negocios en las calles céntricas de Valparaíso y el presidente de la Cámara de Comercio manifestaba su preocupación (EMV, 9/10/1982), el discurso de los diferentes miembros del nuevo equipo económico empezaba a ser contradictorio y el mensaje de los editoriales que redactaba De Castro para *El Mercurio* tampoco parecía coincidir plenamente con el del biministro. Así, mientras Lüders explicaba en ENADE, favor, revisar esto. No está claro, del país, que la reactivación se llevaría a cabo respetando la propiedad privada, la libertad de mercado y la apertura al comercio exterior, es decir, manteniendo el rol subsidiario del Estado y sin ayudas del gobierno a los empresarios (Almonacid, 2016, 132), *El Mercurio* señalaba:

Algunos personeros del Gobierno sugieren que el país podría recuperarse en un tiempo corto y que el desempleo tendría que reducirse de manera substancial en un breve lapso [...] Hay que tener, sin embargo, realismo [...] No hay que hacerse ilusiones con fórmulas mágicas. (EMV, 16/11/1982)

A fines de noviembre Pinochet visitó la región y se reunió con los empresarios de la ASIVA. En ausencia de Lüders, Bardón aclaró que no habría “ninguna variación sustancial en la actual política arancelaria”, descartó que se fuera a autorizar una moratoria general para las deudas con los bancos y advirtió de la lentitud con que se demorarían los cambios, especialmente para el sector de la construcción, otro de los más afectados. El presidente de los empresarios manifestó frustración por los limitados resultados de la descentralización prometida por el gobierno y argumentó protocolariamente que Valparaíso requería “atención preferente de las autoridades”. Pinochet respondió que no le parecía que aquella fuera “una región abandonada de la mano de Dios” y que, geopolíticamente, debía considerarse

parte de la unidad que formaba con el Gran Santiago, limitándose a comprometer algunas inversiones en obras públicas, como la mejora de la conexión viaria con la capital. Las reacciones de los dirigentes empresariales que recoge el diario fueron más bien frías, cuando no de manifiesta decepción (EMV, 30/11/1982).

El Mercurio de Valparaíso ya había relevado meses atrás el desengaño que causaba el fallido proceso de regionalización, la desigual distribución del presupuesto y la concentración de recursos en la capital. Para entonces, la fuerte baja de la recaudación fiscal no auspiciaba ningún apoyo gubernamental para revertir la crisis de las grandes industrias de la región y su repercusión sobre el tejido de la pequeña y mediana empresa. De hecho, en términos políticos, la situación era mucho más grave en otras regiones.

A fines de noviembre, las protestas de los agricultores de Valdivia se extendieron a otras ciudades con apoyo de comerciantes e industriales. Poco después se reunieron, por primera vez en diez años, los dirigentes de las principales asociaciones agrícolas nacionales y se celebró en Santiago un encuentro de todas las organizaciones empresariales adscritas a la Confederación de la Producción y del Comercio. Podlech fue detenido y la ANPT emitió una declaración exigiendo la intervención de la banca y la moratoria y renegociación de las deudas de los empresarios, a la que se sumaron la UDT, el sindicato de taxistas y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, que exigían un cambio definitivo de política económica. Una protesta contra el desempleo convocada por la Coordinadora Nacional Sindical y la Confederación de Trabajadores de la Construcción terminó con la detención de sus presidentes, que fueron enviados al destierro junto a Podlech. Y todo en la primera semana de diciembre. Las tensiones acumuladas desde el escándalo CRAV habían levantado súbitamente un movimiento empresarial y sindical -de derecha a izquierda- que tenía un evidente cariz político, peligroso para la estabilidad de la dictadura (Campero, 1984, pp. 263-272 y 2003, p. 165; Cavallo et al., 1988, pp. 301-302; Almonacid, 2016, p. 132).

La cobertura que dio *El Mercurio de Valparaíso* a todos aquellos incidentes se centró en las declaraciones de Pinochet: “hoy se trata de confundir los conceptos de democracia y libertad” (01/12/1982) y “no habrá un retorno a fórmulas políticas superadas, ya que los problemas económicos no se superan con medidas políticas” (02/12/1982). Se destacó también la opinión del presidente de la SOFOFA sobre “la inconveniencia de producir en el país alarmas exageradas e innecesarias, como presuntas huelgas de camioneros y otras cosas”, y el editorial desautorizaba a los “personeros gremiales que, lamentablemente, parecen haber perdido la medida”

(EMV, 4/12/1982). Pero, evidentemente, existía el riesgo de que se extendiera un movimiento que parecía “una virtual sublevación civil contra la situación económica” (*Análisis*, 52, 12/1982).

Y aunque las expulsiones de sus líderes más críticos podían haber frenado su ímpetu, no habían aplacado las iras de los empresarios (Cavallo et al., 1988, pp. 302). Por supuesto, tampoco habían resuelto la causa de su descontento. No parecía, por tanto, quedar más recurso que apelar a la obediencia de los partidarios de la dictadura (EMV, 7/12/1982). Pero a la vez, en editorial se trataba de despejar el desconcierto que debía de causar a buena parte de los lectores la simultánea expulsión de un empresario junto a “dirigentes sindicales de reconocida simpatía marxista”, por lo que se rescataban los argumentos populistas en defensa del modelo que ya se habían empleado antes del estallido de la crisis y que mostraban las demandas de los empresarios como perjudiciales para los sectores medios y bajos de la población. Se aprovechaba, además, para desprestigiar las reivindicaciones de los sindicatos de izquierda, presentando una incongruente alianza con los sectores nacionalistas (EMV, 7/12/1982), en esa misma línea que trataba de agrupar en una misma heterogénea oposición a “marxistas y políticos”. Para contrarrestar aquel ambiente hostil, el gobierno celebró el fin de año publicando una caída de siete puntos en la tasa de cesantía -gracias a que los inscritos en los programas de empleo del gobierno salían automáticamente de la estadística- y el subsecretario Bardón tranquilizaría los ánimos declarando que “existe una política clara que está empezando a dar frutos” (EMV, 29/12/1982). Sin embargo, nuevos problemas estaban por llegar.

De la crisis económica a la crisis política

Que los empresarios, especialmente los grupos emergentes, fueran quienes se hiciesen cargo de sus propias deudas podía coincidir, en efecto, con la pretensión de la derecha nacionalista y también con el criterio los economistas neoliberales, defensores del ajuste automático y del rol subsidiario del Estado. Sin embargo, la cuenta del fracaso de los *Chicago Boys* en la dirección de la economía del país la terminaría pagando Moya, como se decía coloquialmente en alusión al ciudadano de a pie que resignadamente soportaba el peso de la crisis.

Así quedó claro en las semanas siguientes al 13 de enero de 1983, cuando el ministro Lüders anunció por televisión la tercera intervención bancaria en quince meses, que sería la más drástica. Entre los bancos afectados se encontraban los dos más grandes del país: el Banco de Chile y el Banco de Santiago, este del gru-

po Cruzat-Larraín. El BHC del grupo Vial fue declarado en liquidación. En total, nueve entidades que representaban el 45 % de los activos del sistema financiero. Con las intervenciones anteriores, un conjunto de 22 instituciones financieras que representaban el 60 % del mercado -un 85 % según los cálculos de la SOFOFA- habían quedado bajo control del Estado (Brock, 1989; Morand, 2000).

El plan, diseñado como una operación militar, implicaba el cierre al día siguiente de las oficinas para evitar la fuga de los depósitos -que provocó el pánico de los ahorradores y suponía que los préstamos externos de las entidades liquidadas quedarían impagos. Del resto se haría cargo el Estado. Pero las presiones de la banca internacional obligaron finalmente al Banco Central a avalar las deudas de los bancos (Cavallo et al., 1988, pp. 303). Y eso equivalía a transferir al contribuyente todo el peso de las deudas. *El Mercurio* optó por silenciar la información para no evidenciar el derrumbe absoluto del sistema financiero, como denunciaba la revista *Análisis* (54, 2/1983). Mientras que *La Tercera* censuró a fines de enero una columna de Ricardo Claro titulada “¡Basta!”, en la que desautorizaba a Lüders, se refería a De Castro, Bardón y Kast como “los destructores de Chicago”, y a *El Mercurio* como “el periódico que incita a la destrucción sistemática de la economía del país”, para concluir llamando a las Fuerzas Armadas a restablecer el orden.³

La liquidación del BHC implicaba la extinción del grupo Vial, cuyas principales empresas quedaban en cesación de pagos, al igual que las de Cruzat-Larraín. Pero mientras este negoció con el Banco Central, Vial judicializó su pugna con el gobierno. La continuidad de Lüders al frente del equipo económico resultaba imposible. No podía ser responsable de la renegociación internacional de la deuda chilena, pública y privada, al tiempo que aparecía como corresponsable de una quiebra millonaria y fraudulenta. De hecho, terminaría encarcelados meses después. Pero el terremoto financiero de enero también afectó a otros destacados funcionarios del régimen decisivos en el diseño y aplicación del modelo, como los exministros Léniz, Cauas, Baraona, Federicci y De Castro, que habían desempeñado o desempeñaban en esa fecha puestos de máxima responsabilidad en empresas o bancos de los grupos quebrados y que, en definitiva, habían permitido y contribuido directamente a su expansión. Mientras Pinochet guardaba silencio, se desmoronaba la imagen de “general de los pobres” que había tratado de proyectar los meses anteriores y el hundimiento de los grupos era interpretado por la prensa opositora como el derrumbe del modelo y, en consecuencia, el principio

³ Aunque su contenido se difundió de manera clandestina, la columna no fue publicada hasta la muerte de Claro. *La Nación*, 16/11/2008.

del fin de la dictadura (*Análisis*, 54, 2/1983). Con perspectiva, parece claro que la primera interpretación resultaba mucho más errada aún que la segunda.

A corto plazo se imponía otro relevo de los ministros del equipo económico, el cuarto en menos de un año. Para *La Tercera*, “aunque los relevos han sido siempre una rutina, todos los antecedentes permiten calificar este cambio como señal de una nueva definición de las líneas seguidas” (14/2/1983). El nuevo ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, era un reconocido neoliberal, pero compartía con los “duros” ciertas posiciones políticas, como su oposición al sufragio universal previsto en la Constitución, lo que lo distanciaba de los *Chicago Boys* y de los gremialistas (Osorio y Cabezas, 1995, pp. 135-153). Cáceres anunció pronto un paquete de medidas de emergencia que, ciertamente, suponían un acercamiento a los empresarios, entre ellas la subida de los aranceles al 20 % (Campero, 1984, pp. 277-278). Algunas asociaciones las recibieron favorablemente (*El Mercurio*, 23/3/1983), pero los más críticos -ANPT, CPA, los comerciantes detallistas de Cumsille, los transportistas de Vilarín y, desde entonces, también los gremios de la pequeña industria, entre los que se contaba ASIVA consideraron que no importaban cambios sustanciales y apenas resolvían problemas parciales (*El Mercurio*, 16/4/1983; *La Tercera*, 3 y 18/4/1983).

Desde los editoriales que redactaba para *El Mercurio*, De Castro seguiría defendiendo su ortodoxia en nombre de “quienes postulan una forma de vida más libre, de orientación contraria al socialismo” y desautorizando el cambio de rumbo que representaba una amenaza de control económico y estatismo (*EMV*, 10/4/1983). En cambio, la edición de Valparaíso editorializaba lamentando los efectos de la crisis en la región, la más castigada por la cesantía del país, y atribuía la desaparición del tejido industrial, la fuga de empresas a la capital y el decaimiento de la actividad portuaria y de la construcción -para la que auguraba cinco años de paralización al fallido proceso de regionalización que había sido incapaz de frenar el centralismo metropolitano. En otras palabras, responsabilizaba tácitamente a la inacción del gobierno y pedía la reactivación de las industrias cerradas que habían sostenido el desarrollo económico regional, aludiendo en concreto a la CRAV (*EMV*, 8/5/1983).

De todas formas, el cambio de rumbo que pretendía De Castro vino motivado por un factor ajeno a las tensiones entre el gobierno y los empresarios, y con resultados sorprendentes. El 11 de mayo ocurrió la primera de las jornadas de protesta nacional convocada principalmente por la CTC, el sindicato más fuerte, con el respaldo de los grupos de oposición adheridos al *Manifiesto Democrático* firmado en

marzo. La jornada fue secundada masivamente por múltiples sectores de la población y la respuesta represiva no se hizo esperar con semejante intensidad. Pero las protestas se replicaron mensualmente en los meses siguientes, demostrando la erosión del régimen. A pesar de su gravedad, la crisis económica dejaba de ser el principal problema del gobierno y, en consecuencia, el foco de atención de la prensa oficialista cambió (Campero, 1984, p. 279; Maza y Garcés, 1985; Cavallo et al., 1988, pp. 304-305).

En ese contexto, la CPC formuló un plan alternativo de recuperación que contaba con el consenso de las diferentes asociaciones empresariales y fue entregado al ministro Cáceres el 8 de julio. Entonces, en una nueva fractura del gobierno, el ministro de Economía, Manuel Martín empresario con gran ascendiente en el gremio, amigo personal de Pinochet y crítico con la gestión de los *Chicago Boys*-, preparó su propia propuesta de reactivación, opuesta también a las medidas de Cáceres, y la presentó en una reunión de la Confederación del Comercio Detallista con inmediatas manifestaciones de apoyo de las pequeñas y medianas asociaciones empresariales (Campero, 1984, pp. 279-282). Por aquellos mismos días, el presidente de la ASIVA había insistido en la necesidad de que “el gobierno tenga una política de desarrollo regional bien llevada” (EMV, 8/7/1983), ante el golpe a la economía regional que suponía el cierre de la fábrica de galletas y chocolates Huckle, otra de las grandes industrias de la región que, después de fusionarse con la empresa McKay (EMV, 6/1/1981), iniciaba su traslado a Santiago, generando aún más desempleo en Valparaíso (EMV, 26/8/1983-11/10/1983).

El progresivo deterioro de la credibilidad del gobierno por la brecha abierta entre Cáceres y Martín constituía una nueva amenaza ante la que *El Mercurio* apostó por el primero. Así, a pesar de haber criticado anteriormente su paquete de emergencia, los editoriales económicos redactados desde Santiago defendían las “señales que permiten pensar en una recuperación de la confianza”, y elogiaban la seriedad de Cáceres y la congruencia de sus decisiones, especialmente los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y con la banca extranjera sobre renegociación de la deuda (EMV, 4/7/1983). Y, concretamente, desautorizaba los planes alternativos de la CPC y del ministro Martín porque erosionaban la credibilidad y unidad del gobierno que tanto había costado restablecer y porque, en definitiva, coincidían con “políticas que probadamente ocasionaron en el pasado económico chileno agudas crisis que no tuvieron justificación externa alguna” (EMV, 20/7/1983). Los editoriales económicos redactados en Santiago seguían usando los mismos argumentos para eludir la responsabilidad de los *Chicago Boys* en la crisis y para

desprestigiar con la sombra del socialismo cualquier atisbo de política económica encaminada a sostener la estructura de la industria nacional, aunque se emplearan ahora para defender a un ministro que había elevado los aranceles de protección nada más llegar y cuya gestión se alejaba de la ortodoxia neoliberal antes defendida por el diario.

La erosión que las jornadas de protesta causaban a la dictadura parecían justificar aquel cambio de rumbo editorial. Pero también la comprometida situación financiera del grupo Edwards, que se había endeudado riesgosamente en los años en que Sergio de Castro mantuvo el dólar fijo. Con la devaluación, la deuda de El Mercurio Sociedad Anónima Periodística (EMSAP) se multiplicó, al tiempo que la crisis provocaba una caída de la inversión publicitaria justo cuando era más necesaria y, para 1983, el balance arrojaría pérdidas de 22,5 millones de dólares. Sin embargo, a pesar de la quiebra virtual del EMSAP y del hundimiento del grupo Edwards, el Ministerio de Hacienda no había intervenido el Banco Edwards en enero de 1983. Al contrario, el Estado le otorgó nuevos préstamos, elevando su deuda a 67 millones de dólares. Efectivamente, la dictadura protegió a Agustín Edwards, aunque ahora sus acreedores –el Banco del Estado y la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones– poseían el 51 % de las acciones del grupo editorial (APSI, 2/1984; Dermota, 2002, pp. 109-111). En esas condiciones, más allá de los escrúpulos teóricos que De Castro y otros *Chicago Boys* acogidos en la redacción de *El Mercurio* al salir del gobierno pudieran sentir por el pragmatismo de las nuevas medidas económicas, la línea editorial no podía desviarse de su adhesión al régimen cívico-militar, especialmente cuando la derecha nacionalista cuestionaba su respuesta ante la crisis, la oposición de izquierda mostraba una estrategia cada vez más cohesionada y en las calles clamaba la masiva protesta ciudadana.

Desde Valparaíso, los argumentos empleados eran diferentes, algunos contradictorios. Pero también se orientaban a apuntalar el apoyo a la dictadura de los sectores medios que conformaban mayoritariamente el público objetivo de *El Mercurio de Valparaíso*. Así, a fines de julio, un editorial comentaba la preocupación por el aumento del desempleo de la Confederación de Empleados Particulares de Valparaíso –uno de los segmentos socioeconómicos más afectados por las políticas neoliberales– y ofrecía una sencilla explicación del desmantelamiento industrial en la región. Algunas empresas “habían sido trasladadas a la capital por decisión de sus dueños” en ejercicio de la libertad de empresa, pero también en desmedro del desarrollo de la región, por lo que el Estado “debió arbitrar medidas para evitarlo”. Ciertamente, aquel no parecía un argumento muy afín a la concepción neoliberal

del rol subsidiario del Estado, pero cuadraba con la frustración con la que podía identificarse buena parte de los lectores del diario, como profesionales autónomos, empleados de los cuadros intermedios –incluidos los cesantes– y pequeños y medianos empresarios locales. En cualquier caso, también debían asumir que otras empresas habían quebrado por causa de una gestión ineficiente y, como era sabido, la especulación tiene sus riesgos. Pero, más aún, que muchas habían sucumbido “por falta de consumidores, que desdeñaron la oferta regional para inclinarse por alternativas foráneas”. En resumidas cuentas, “la industria local se eclipsó cuando los porteños, sea como consumidores individuales o como jefes de grandes núcleos compradores públicos o privados, eligieron bienes manufacturados fuera de la región” (EMV, 28/7/1983). Esa era la otra cara de las ventajas de la apertura comercial. Por tanto, si como trabajadores o productores se encontraban desempleados o quebrados era por las decisiones que ellos mismos como consumidores habían tomado libremente en una economía de mercado. No en vano aquel era un régimen político y un modelo económico para adultos.

Las tensiones interministeriales no cesarían y fueron nuevamente resueltas por Pinochet con otro cambio de gabinete en agosto de 1983. Martín fue reemplazado por Andrés Passicot, quinto ministro de Economía en lo que iba de año, y Cáceres fue confirmado, dando respaldo a su plan de emergencia. Con el nombramiento de Sergio Onofre Jarpa como ministro de Interior se abriría una nueva etapa de relativa apertura política, orientada a enfrentar las protestas y a recuperar una base más amplia y estable de apoyos para el régimen (Campero, 1984, pp. 282). Y aunque los efectos de la crisis económica se mantendrían aún, para *El Mercurio* parecían el precio que pagar por la libertad económica que había traído el golpe de 1973. Era el precio del ajuste. Pagaba Moya.

Conclusiones

La aplicación de las políticas neoliberales durante la dictadura de Pinochet y, en concreto, la apertura de la economía chilena mediante la reducción de los aranceles a la importación tuvo un efecto devastador sobre el tejido industrial de la región de Valparaíso. Las primeras manifestaciones de descontento por parte del empresariado regional –expresadas por la dirección de la ASIVA– pueden datarse antes, incluso, del escándalo que provocó la quiebra de la CRAV en junio de 1981. A partir de ella se extendió una ola de desempleo y cierres de pequeñas y medianas empresas cuyas actividades giraban en torno a la que había sido emblema de la tradición fabril de la ciudad de Viña del Mar, una de las principales empresas

del país y exponente de la emergencia de los grupos económicos que crecieron amparados en la falta de mecanismos de control financiero. El “holding” del que la CRAV formaba parte tenía estrechos vínculos no solo con esos grupos emergentes, sino también con el grupo Edwards y con *El Mercurio*, tanto por las conexiones familiares y empresariales de sus propietarios como por su vinculación con altos funcionarios del régimen, como el ministro Sergio de Castro, que había sido directivo de la azucarera antes de convertirse en principal asesor económico del gobierno. Por tanto, no extraña que *El Mercurio de Valparaíso* tratara inicialmente de minimizar el efecto de aquella quiebra, sus implicaciones políticas y sus consecuencias económicas posteriores, aduciendo los mismos argumentos técnicos que venía empleando desde años atrás para defender la excelencia del neoliberalismo: la autorregulación del mercado, la mejora de la competitividad tras el fin del intervencionismo estatal, el rol protagónico del consumidor en el nuevo modelo económico -definido como un “sistema para adultos” orientado al beneficio de las mayorías- y, en definitiva, los resultados alcanzados desde 1973 en relación con la mejora de los niveles de consumo entendida como sinónimo de superación de la pobreza.

A pesar de ello, la quiebra de la CRAV, agravada por el empeoramiento de la situación económica, abrió una brecha que evidenció las diferencias existentes entre las distintas facciones del oficialismo, incluso en el seno de los *Chicago Boys*, y que terminaría provocando la salida de Sergio de Castro del Ministerio de Hacienda, que pasó a dirigir la sección económica de *El Mercurio*. La inmediata devaluación y las sucesivas intervenciones del sistema bancario no implicaron un cambio de rumbo significativo en la política económica. Pero la línea editorial definida desde Santiago mantuvo su estricta defensa de la ortodoxia del modelo y mostró cierto distanciamiento del diario respecto del equipo económico del gobierno, llegando algunas decisiones gubernamentales al considerarlas demagógicas e incompatibles con un sistema de auténtica libertad económica y “de orientación contraria al socialismo”. Cualquier variación de la línea original planteada por De Castro era considerada peligrosa amenaza de estatismo y desautorizada con la sombra de los aciagos tiempos de la Unidad Popular. Sin embargo, a medida que se generalizaban los efectos de la crisis económica nacional, sus efectos se extendían desde las grandes empresas de la región a sectores como la industria pesquera, textil, alimentaria y de la construcción, paralizados o directamente desaparecidos. La denuncia de una ofensiva contra el modelo en la que supuestamente coincidían la oposición de izquierdas con “los adversarios larvados del gobierno” y los empresarios descontentos por sus malos resultados se articularía entonces a

partir de argumentos más elementales, como mantener la lealtad al comandante en jefe y la fe en la economía chilena, además de insistir en el origen externo de la crisis, lo que eximía de responsabilidad a quienes habían dirigido la política económica en los años previos. Junto a ello, asumir la frustración ante la fallida descentralización económica permitió a *El Mercurio de Valparaíso* establecer una corriente de empatía con el segmento mayoritario del público al que se orientaba y sobre el que pretendía influir aglutinando la adhesión a la dictadura, aunque esos mismos lectores que pertenecían a los sectores medios y bajos fuesen quienes más directamente sufrían las consecuencias de la crisis. Asimismo, permitió desviar la atención en los momentos más críticos poniendo el foco de atención sobre un asunto que -dada la arraigada tradición centralista de Chile- resultaba suficientemente abstracto como para diluir las responsabilidades gubernamentales.

Si bien faltan estudios que analicen de manera específica el desempeño económico y el posicionamiento político del empresariado de la región de Valparaíso ante las políticas neoliberales y ante la crisis, es posible afirmar que el mensaje de *El Mercurio de Valparaíso* contribuyó a aplacar sus ánimos cuando en, diciembre de 1982, se levantó un movimiento empresarial y sindical ideológicamente heterogéneo que amenazó fugazmente con quebrar las bases de apoyo social del régimen de Pinochet. En cualquier caso, parece que la capacidad de presión de los gremios industriales y comerciales de la región se encontraba por entonces muy debilitada, precisamente por haber sido duramente afectados por la oleada de quiebras resultado de la desprotección arancelaria, el endeudamiento y la reducción del consumo local. Aunque su decepción fuera semejante a la de otros gremios empresariales, como los agricultores o los transportistas, por el apoyo que todos habían prestado al golpe militar, su influencia política y su peso económico eran indudablemente mucho menores. Ello explica que *El Mercurio de Valparaíso* mantuviera su firme defensa de la ortodoxia liberal y que llegara a argumentar que la responsabilidad del desmantelamiento industrial en la región correspondía, en última instancia, a las empresas y consumidores que habían escogido libremente adquirir los productos fabricados fuera de ella que el mercado abierto ponía a su disposición gracias a la liberalización de la economía. Solo la amenaza sostenida que para la dictadura supusieron las jornadas de protesta nacional a partir de mayo de 1983 y la comprometida situación de endeudamiento del grupo Edwards con el Banco del Estado harían variar la línea de los editoriales económicos de *El Mercurio*. Así, cuando el gobierno transigió un acercamiento al empresariado tradicional con el aumento de los aranceles de importación, el cierre de filas se antepuso a las discrepancias o reparos que aquellas medidas pudieran generar entre

los otros *Chicago Boys* que redactaban la “Página económica”. La estabilidad de la dictadura era un fin mayor. Como también lo era sanear las cuentas y recuperar el control de una empresa que había marcado el rumbo político de la nación a lo largo de toda su historia.

Referencias

- Almonacid, F. (2016). Neoliberalismo y crisis económica: políticas estatales, mercado y agricultores en Chile, 1973-1985. *Historia crítica*, 62, 119-139.
- Angell, A. (1993). *Chile de Alessandri a Pinochet: En busca de la utopía*. Santiago de Chile: Andrés Bello.
- Ansaldo, C. (2004). *Historia de la industria y su desarrollo. V Región*. Viña del Mar: ASIVA.
- Arellano, J. P. y Cortázar, R. (1982). Del milagro a la crisis: Algunas reflexiones sobre el momento económico. *Colección Estudios Cieplan*, 8, 43-60.
- Bárcena, A. (2014). La crisis de la deuda latinoamericana: 30 años después. En J. A. Ocampo, B. Stallings, I. Bustillo, H. Velloso y R. Frenkel, *La crisis latinoamericana de la deuda desde la perspectiva histórica (9-18)*. Santiago de Chile: Cepal.
- Borrat, H. (1989). *El periódico, actor del sistema político*. *Análisis*, 12, 67-80.
- Bravo, F. (2002). Caso CRAV S.A. Facultad de Economía y Negocios-Universidad de Chile: Documentos de trabajo.
- Brock, P. L. (1989). La crisis financiera chilena. *Cuadernos de Economía*, 78, 177-194.
- Caldwell, B. & Montes, L. (2015). Friedrich Hayek y sus dos visitas a Chile. *Estudios Públicos*, 137, 87-132.
- Campero G. (1984). *Los gremios empresariales en el periodo 1970-1983. Comportamiento político y orientaciones ideológicas*. Santiago de Chile: ILET.
- Campero, G. (2003). La relación entre el Gobierno y los grupos de presión: el proceso de la acción de bloques a la segmentada. *Revista de Ciencia Política*, XXIII(2), 159-176.
- Cavallo, A., Salazar, M. y Sepúlveda, O. (1988). *La historia oculta del régimen militar*. Santiago de Chile: La Época.
- Correa, S. (1985). Algunos antecedentes históricos del proyecto neoliberal en Chile (1955-1958). *Opciones*, 6, 106-146.
- Correa, S. (2011). *Con las Rendas del Poder. La Derecha Chilena en el Siglo XX*. Santiago de Chile: DeBolsillo.
- Correa, S., Figueroa, C., Jocelyn-Holt, A., Rolle, C. y Vicuña, M. (2003). *Documentos del siglo XX chileno*. Santiago de Chile: Sudamericana.
- Cristi, R. (2018). Una Política Total. El ánimo refundacional de El Mercurio 1973/1974. *Economía y Política*, 5(1), 5-36
- Déllano, M., Luengo, A. y Salazar, M. (1983). *Para entender al Decano*. Santiago de Chile: Ainavillo.
- Dermota, K. (2002). *El periodismo bajo democracia*. Santiago de Chile: Ediciones B.

- Dooner, P. (1989). *Periodismo y política. La prensa de derecha e izquierda. 1970-1973*. Santiago de Chile: Andante.
- Dougnac, P. (2007). Los derechos humanos bajo la lupa de El Decano. Memoria de titulación, Escuela de Periodismo, Universidad de Chile.
- Edwards, A. (1928). *La fronda aristocrática en Chile*. Santiago de Chile: Imprenta Nacional.
- Escalante, F. (2015). *Historia mínima del neoliberalismo*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Ffrench-Davis, R. (2005). *Reformas para América Latina después del fundamentalismo neoliberal*. Buenos Aires: Cepal-Siglo XXI.
- Ffrench-Davis, R. (2018). *Reformas económicas en Chile, 1973-2017*. Santiago de Chile: Penguin Random House.
- Ffrench-Davis, R., Muñoz, Ó. y Palma, J. G. (2002). Las economías latinoamericanas, 1950-1990. En T. Halperin, W. Glade, R. Thorp, A. Bauer, M. Moreno, C. Lewis, V. Bulmer-Thomas, J.G. Palma, O. Muñoz y R. Ffrench-Davis, *Historia Económica de América Latina: desde la independencia a nuestros días* (323-401). Barcelona: Crítica.
- Fontaine A. (1988). *Los economistas y el Presidente Pinochet*. Santiago de Chile: Zig-Zag.
- Gárate, M. (2012). *La Revolución Capitalista de Chile (1973-2003)*. Santiago de Chile: Universidad Alberto Hurtado.
- Garay, C. y Willicke, K. (2007). El Mercurio y el 11 de septiembre del 73. *Revista Universum*, 22(1), 318-339.
- González Inostroza, M. A., (2017). *Gonzalo Vial Correa. Las sinuosidades de una trayectoria intelectual, 1969-1991*, Santiago de Chile: Ril.
- González Pino, M. (1992). La historia reciente de Chile a través de La Semana Política. *Estudios Públicos*, 46, 365-614.
- González, M. (2000). *La Conjura. Los mil y un Días del Golpe*. Santiago de Chile: Ediciones B.
- Harvey, D. (2007). *Breve historia del neoliberalismo*. Madrid: Akal.
- Herrero, V. (2014). *Agustín Edwards Eastman. Una biografía desclasificada del dueño de El Mercurio*. Santiago de Chile: Debate.
- Lagos C., Salinas, C. y Stange, H. (2009). El diario de Agustín. El involucramiento de El Mercurio durante la dictadura militar chilena (1973-1990): un estudio de casos. En A. Cañizalez (Coord.), *Tiempos de cambio. Política y comunicación en América Latina* (pp.171-186). Caracas: Universidad Católica Andrés Bello.
- Laval, C. y Pierre Dardot, P. (2013). *La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal*. Barcelona: Gedisa.
- Lovera, P. (2018). El dificultoso camino a la neoliberalización: el caso de la Sociedad Nacional de Agricultura, 1983-1990. *Divergencia*, 10, 39-61.
- Lüders, R. (1982). *Exposición sobre el estado de la Hacienda Pública*. Santiago de Chile: Ministerio de Hacienda.
- Lüders, R. (2012). *La Misión Klein-Saks, los Chicago Boys y la política económica*. Instituto de Economía-Pontificia Universidad Católica de Chile: Documentos de trabajo.
- Maza, G. de la y Garcés, M. (1985). *La explosión de las mayorías. Protesta nacional, 1983-1984*. Santiago de Chile: Educación y Comunicaciones.

- Meller, P. (2016). *Un siglo de economía política chilena (1890-1990)* (2ª ed.). Santiago de Chile: Uqbar.
- Morand, L. (2000). Apuntes sobre la fiscalización bancaria en Chile, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. *Información Financiera*, 9, 13-26.
- Moulian, T. (1997). *Chile actual. Anatomía de un mito*. Santiago de Chile: Arcis-Lom.
- Ocampo, J. A. (2014). La crisis latinoamericana de la deuda a la luz de la historia. En J. A. Ocampo, B. Stallings, I. Bustillo, H. Velloso y R. Frenkel, *La crisis latinoamericana de la deuda desde la perspectiva histórica (19-51)*. Santiago de Chile: Cepal.
- Osorio, V. y Cabezas, I. (1995). *Los hijos de Pinochet*. Santiago de Chile: Planeta.
- Osorio, V. (2019). La marcha del hambre de 1982: un olvidado hito clave de la resistencia a la tiranía. *Crónica Digital*, 8. Recuperado de: <https://www.cronicadigital.cl/2019/08/19/la-marcha-del-hambre-de-1982-un-olvidado-hito-clave-de-la-resistencia-a-la-tirania/>
- Puello-Socarrás, J. F. (2015). Neoliberalismo, antineoliberalismo, nuevo neoliberalismo. Episodios y trayectorias económico-políticas suramericanas, 1973-2015. En L. Rojas Villagra (Coord.), *Neoliberalismo en América Latina. Crisis, tendencias y alternativas* (pp.19-42). Asunción: Clacso.
- Rivera, C. (2017). Prensa y política. El poder de la construcción de la realidad. Chile, siglos XIX y XX. En I. Jaksic y J. L. Ossa Santa Cruz (Eds.), *Historia política de Chile, 1810-2010: Prácticas políticas*, t. I (pp. 211-241). Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.
- Riveros, F. (1992). Efectos Regionales de las políticas económicas en Chile: 1974-1986. *EURE*, XVIII(54), 31-48.
- Santa Cruz, E. (1988). *Análisis histórico del periodismo chileno*. Santiago de Chile: Nuestra América.
- Silva E. (1996). *The State and Capital in Chile: Business Elites, Technocrats, and Market Economics*. Nueva York: Routledge.
- Silva, E. (1993). Capitalist Coalitions, the State, and Neo-liberal Economic Restructuring: Chile, 1973-88. *World Politics*, 45(4), 526-559.
- Soto, A. (1995). *El Mercurio y la difusión del pensamiento político económico liberal 1955-1970*. Santiago de Chile: Instituto Libertad.
- Sunkel, G. (1986). El Mercurio como medio de educación político-ideológica (1969-1979). En F. Reyes, C. Ruiz y G. Sunkel, *Investigación sobre la Prensa en Chile (1974-1984)* (pp. 99-111). Santiago de Chile: CERC-ILET.
- Valdivia, V. (2003). *El golpe después del golpe. Leigh vs. Pinochet. Chile 1960-1980*. Santiago de Chile: Lom.
- Vallina, A. M., Poloni, C., Pizarro, B. y Aguilar, K. (2010). *Desarrollo de la industria en la región de Valparaíso desde el nacimiento de ASIVA hasta la actualidad*. Viña del Mar: ASIVA.
- Vicaría de la Solidaridad (1982). Informe Mensual, agosto. Recuperado de: <http://www.vicariadelasolidaridad.cl/node/8599>
- Zemelman, H. (1990). Chile: el régimen militar, la burguesía y el Estado. Panorama de problemas y situaciones, 1974-1987. En P. González Casanova (Ed.), *El Estado en América Latina: teoría y práctica* (pp. 291-322.) México: Siglo XXI.